



REPÚBLICA ARGENTINA  
**VERSIÓN TAQUIGRÁFICA**  
(PROVISIONAL)

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Período 134°

**13ª Reunión - 5ª Sesión ordinaria - 7 de septiembre de 2016**

Presidencia de la señora vicepresidente de la Nación, Lic. **Marta Gabriela Michetti**,  
y del señor presidente provisional del H. Senado, senador D. **Federico Pinedo**.

Secretarios: señor D. **Juan Pedro Tunessi** y señor D. **Helio Rebot**

Prosecretarios: señor D. **Mario Daniele**, señor D. **Eric Calcagno y Maillmann** y señor  
D. **Ángel Torres**

---

**PRESENTES:**

ABAL MEDINA, Juan Manuel  
AGUILAR, Eduardo Alberto  
AGUIRRE DE SORIA, Hilda Clelia  
ALMIRÓN, Ana Claudia.  
ALPEROVICH, José Jorge  
BARRIONUEVO, Walter Basilio  
BASUALDO, Roberto Gustavo  
BLAS, Inés Imelda  
BOYADJIAN, Miriam Ruth  
BRAILLARD POCCARD, Néstor  
CABRAL ARRECHEA, Salvador  
CASERIO, Carlos  
CASTILLO, Oscar Aníbal  
CATALÁN MAGNI, Julio César  
COBOS, Julio César Cleto  
CREXELL, Lucila  
DE ANGELI, Alfredo  
DE LA ROSA, María Graciela  
DURANGO, Norma  
ELÍAS DE PEREZ, Silvia Beatriz  
ESPÍNOLA, Carlos  
FELLNER, Liliana Beatriz  
FERNÁNDEZ SAGASTI, Anabel  
FIORE VIÑUALES, María Cristina del Valle  
FUENTES, Marcelo Jorge  
GARCÍA, Virginia María  
GARCÍA LARRABURU, Silvina Marcela  
GIACOPPO, Silvia del Rosario  
GIMÉNEZ, Sandra Daniela  
GODOY, Ruperto Eduardo  
GONZÁLEZ, Nancy  
GUASTAVINO, Pedro Guillermo Ángel  
IRRAZÁBAL, Juan Manuel  
ITURREZ DE CAPELLINI, Ada del Valle  
KUNATH, Sigrid Elisabeth  
LABADO, María Esther  
LEGUIZAMÓN, María Laura

LINARES, Jaime  
LOVERA, Daniel  
LUENZO, Alfredo  
LUNA, Mirtha María Teresita  
MARINO, Juan Carlos  
MARTÍNEZ, Alfredo Anselmo  
MARTÍNEZ, Ernesto Félix  
MAYANS, José Miguel Ángel  
MENEM, Carlos Saúl  
MIRKIN, Beatriz  
MONTENEGRO, Gerardo Antenor  
NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita  
ODARDA, María Magdalena  
OJEDA, José Antonio  
PAIS, Juan M.  
PEROTTI, Omar  
PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos  
PICHETTO, Miguel Ángel  
PILATTI VERGARA, María Inés  
PINEDO, Federico  
REUTEMANN, Carlos Alberto  
RIOFRÍO, Marina Raquel  
RODRÍGUEZ MACHADO, Laura  
RODRÍGUEZ SAÁ, Adolfo  
ROMERO, Juan Carlos  
ROZAS, Ángel  
SACNUN, María de los Ángeles  
SOLANAS, Fernando Ezequiel  
URTUBEY, Rodolfo Julio  
VARELA, Marta Lucía  
VERASAY, Pamela Fernanda  
ZAMORA, Gerardo

**AUSENTES, CON AVISO:**

MERA, Dalmacio  
PEREYRA, Guillermo Juan  
PÉRSICO, Daniel Raúl

## SUMARIO

1. Izamiento de la bandera nacional.
2. Aprobación de versión taquigráfica.
3. Asuntos entrados.
4. Mociones de preferencia.
5. Pedidos de tratamiento sobre tablas.
6. Mociones de preferencia. (Continuación.)
7. Pedidos de tratamiento sobre tablas. (Continuación.)
8. Plan de labor.
9. Giro de un proyecto.
10. Plan de labor. (Continuación.)
11. Modificación del Código Penal por la que se incorpora la figura del arrepentido. (O.D. N° 605/16.) Modificación del Código Procesal Penal por la que se regula un procedimiento especial para delitos cometidos en flagrancia (O.D. N° 606/16.)
12. Cuestión de privilegio.
13. Modificación del Código Penal por la que se incorpora la figura del arrepentido. (O.D. N° 605/16.) Modificación del Código Procesal Penal por la que se regula un procedimiento especial para delitos cometidos en flagrancia. (O.D. N° 606/16.) (Continuación.)
14. Derecho de acceso a la información pública. (O.D. N° 604/16.)
15. Cuestión de privilegio. (S.-3.475/16.)
16. Derecho de acceso a la información pública. (O.D. N° 604/16.) (Continuación.)
17. Modificación de la ley del impuesto al valor agregado. (C.D.-146/15.)
18. Consideración en conjunto de dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.  
Aprobación del convenio para eliminar la doble imposición en relación a los impuestos sobre la renta y el patrimonio para prevenir la evasión y elusión fiscal con la República de Chile. (O.D. N° 543/16.)  
Aprobación de la constitución y el X protocolo adicional de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal. (O.D. N° 539/16.)  
Aprobación del convenio para la prevención y lucha contra el tráfico ilícito y la restitución de bienes culturales transferidos, apropiados, exportados o importados ilícitamente con la República del Ecuador. (O.D. N° 540/16.)  
Aprobación del tratado con la Federación de Rusia sobre asistencia legal recíproca en materia penal. (O.D. N° 541/16.)  
Aprobación del Convenio de Seguridad Social con Ecuador. (O.D. N° 546/16.)
19. Modificación de la ley de tarjetas de crédito. (O.D. N° 545/16.)
20. Acuerdo federal con la provincia de Santa Cruz. (P.E.-128/16.)
21. Constitución de la Cámara en comisión.
22. Consideración en conjunto de órdenes del día.  
Solicita informes sobre la auditoría en la Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín”. (O.D. N° 166/16.)  
Solicita la ejecución de obras en una ruta nacional en la provincia de Tucumán. (O.D. N° 363/16.)  
Solicita informes sobre la eliminación de las retenciones a la actividad minera. (O.D. N° 378/16.)  
Solicita se complete la provisión de paneles solares para áreas rurales en Salta. (O.D. N° 406/16.)

Declaración de beneplácito por la celebración de la Fiesta Sol Inti Raymi 2016, Catamarca. (S.-2.286/16.)

24. Apéndice.<sup>1</sup>

- Actas de votación.
- Plan de labor.
- Asuntos entrados.
- Asuntos considerados y sanciones del Honorable Senado.
- Inserciones.

---

<sup>1</sup>El Apéndice de la versión taquigráfica digital incluye las actas de votación y las inserciones remitidas a la Dirección General de Taquígrafos para su publicación. La documentación completa contenida en el Apéndice figura en la versión impresa del Diario de Sesiones.



**Sra. Negre de Alonso.-** El artículo 2º que modifica el artículo 353 bis.

**Sra. Presidente.-** Entonces, después de la votación en general, se va a votar el artículo 1º, luego del artículo 2º y luego el resto de la ley.

Primero se vota en general.

- *Se practica la votación por medios electrónicos.*

**Sr. Secretario (Tunessi).-** Resultan afirmativos 63 votos; negativos, 3 votos; y cero abstenciones.

- *El resultado de la votación surge del acta correspondiente.*<sup>10</sup>

**Sra. Presidente.-** Se va a votar el artículo 1º y el resto del articulado, con excepción del artículo 2º.

**Sr. Secretario (Tunessi).-** Artículos 1º y 3º al 17.

La senadora García no tiene habilitado el sistema... ¿Ya se lo habilitaron?

**Sra. García.-** No.

**Sra. Presidente.-** Me piden que lo diga a viva voz.

- *Se practica la votación por medios electrónicos.*

**Sr. Secretario (Tunessi).-** Resultan 62 votos afirmativos, 3 votos negativos y cero abstenciones.

- *El resultado de la votación surge del acta correspondiente.*<sup>11</sup>

**Sra. García.-** ¿Cómo quedó registrado mi voto? ¿Afirmativo, negativo...?

**Sra. Presidente.-** ¿Cómo quedó registrado el voto de la senadora García?

**Sr. Secretario (Tunessi).-** De viva voz, negativo, senadora.

**Sra. García.-** No, de viva voz no dije nada. Afirmativo.

**Sr. Secretario (Tunessi).-** Afirmativo quise decir. Perdón.

**Sra. Presidente.-** Vamos a votar el artículo 2º.

- *Se practica la votación por medios electrónicos.*

**Sr. Secretario (Tunessi).-** Resulta afirmativos 60 votos; negativos 6, votos; abstenciones, cero votos.

- *El resultado de la votación surge del acta correspondiente.*<sup>12</sup>

**Sra. Presidente.-** Este se comunica al Poder Ejecutivo nacional porque ya es ley.<sup>13</sup>

#### 14. Derecho de acceso a la información pública (O.D. N° 604/16.)

**Sra. Presidente.-** Corresponde la consideración del Orden del Día que por Secretaría se enunciará.

**Sr. Secretario (Tunessi).-** Orden del Día N° 606/16. Perdón, discúlpenme: 604. Disculpen el error. Comisión de Asuntos Constitucionales, de Presupuesto y Hacienda y de Justicia y Asuntos Penales, dictamen en los proyectos de ley venidos en revisión y en el de varios señores senadores, por el que se garantiza el derecho de acceso a la información pública. C.D-17/16; S.-2.060/15, S.-3.240/15, S.-3.832/15, S.-3.934/15, S.-4.074/15 y 4.128/15; S.-24/16, S.-225/16, S.-611/16, S.-1.081/16 y S.-2.236/16.

Cuenta con el anexo I, dictamen en minoría con la firma de varios senadores, y tiene el anexo II, dictamen en minoría de la senadora Crexell. Son dos dictámenes en minoría.

<sup>10</sup> Ver el Apéndice.

<sup>11</sup> Ver el Apéndice.

<sup>12</sup> Ver el Apéndice.

<sup>13</sup> Ver el Apéndice.

**Sra. Presidente.-** Se pone el dictamen a consideración del cuerpo. El miembro informante es el senador Petcoff Naidenoff, pero antes me está pidiendo la palabra el senador Pais para alguna aclaración.

**Sr. Pais.-** Señora presidente: más allá de que hablen los miembros informantes de los dictámenes, pido que se abra la lista de oradores para que se inscriban y se cierre.

**Sra. Presidente.-** Estamos armándola y, mientras va a hablando el miembro informante, la terminamos de hacer ¿Quiere que la cerremos?

La armamos para cuando termine el senador y ya la votamos.

**Sr. Pais.-** Perfecto. Anóteme a mí también.

**Sra. Presidente.-** Ahí está.

Tiene la palabra el senador Fuentes.

**Sr. Fuentes.-** Atento que el senador Naidenoff va a ser el miembro informante por la mayoría y hay miembros informantes por minorías. Simplemente quiero destacar la labor que realizó la comisión, la cantidad de once proyectos de ley de senadores de esta casa, más de treinta exposiciones. Fue un trabajo cuya intensidad trajo como consecuencia las modificaciones y propuestas que van a ser informadas.

Posteriormente de los informes hay una propuesta que haremos al momento de la votación.

**Sra. Presidente.-** Ahora sí, tiene la palabra el senador Naidenoff.

**Sr. Petcoff Naidenoff.-** Señora presidenta: creo sinceramente que, si en este día terminamos de acompañar esta sanción que fue aprobada por unanimidad en Diputados, con 229 votos a favor y 4 en contra, la verdad que vamos a dar...

*- Murmullos en el recinto.*

**Sra. Presidente.-** Perdón, vamos a ordenarnos porque, si no, va a ser difícil.

Un poquito de silencio para el miembro informante, por favor.

**Sr. Petcoff Naidenoff.-** Creo sinceramente que vamos a saldar una deuda pendiente que tenemos como país.

Como lo expresara en la última reunión del plenario de comisiones, la Argentina, juntamente con Bolivia, Costa Rica y Venezuela, integra este grupo reducido de países de América Latina que no cuenta con una ley de acceso a la información pública.

La información pública no solamente está relacionada con el hecho de la publicidad de los actos de gobierno, sino que tiende a la transparencia, a la rendición de cuentas de los funcionarios públicos y es una herramienta muy potente.

Así como avanzamos con la ley del arrepentido, esta iniciativa tiene mucho que ver para tratar de poner freno a determinados actos que vienen de la mano de la discrecionalidad y de la corrupción en el manejo de la función pública.

Siempre los pasos fueron a mitad de camino. En 2003, en 2010, sanción en Diputados, sanción en la Cámara de Senadores.

En 2003, con el decreto 1.172, del expresidente Néstor Kirchner, creo yo que se dio el primer paso concreto para plasmar esta idea de que los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil y los propios legisladores puedan contar con una herramienta que nos facilite la información.

La verdad que tenía su gran limitante, que estaba dada en que la información cerraba el círculo estrecho de los organismos del Poder Ejecutivo nacional. Es decir que la legitimación era muy estrecha y los organismos que tenían que brindar información eran muy limitados. Era muy limitado el margen de la información o de los organismos que podían brindar datos para con los ciudadanos. Esta herramienta fue muy potente,

pero con el paso del tiempo la experiencia nos demostró que la celeridad inicial fue perdiendo fuerza.

Por eso creo que hoy estamos ante una gran oportunidad de saldar una deuda, que sinceramente va a significar un salto de calidad muy importante y que viene quizás a cubrir las expectativas o las demandas colectivas de la sociedad, en este momento tan particular de la Argentina.

Así como este paso es un avance en materia de calidad democrática y republicana también sería importante que se pueda concretar en muchas provincias del país. ¿Por qué digo esto? Voy a reiterar algunas cosas que se dan. La Argentina tiene distintas caras y en este ámbito federal nos plantamos levantando las banderas del federalismo, de la democracia y de la República. Pero este republicanismo que se ejerce con mucha fuerza en el Senado de la Nación a veces no se concreta en nuestras provincias con estas herramientas.

Y así como hay muchas que cuentan con una ley de acceso a la información pública, para garantizar transparencia, para terminar con el oscurantismo, para terminar con este Estado cerrado –que tiene mucho de cosa turbia cuando no se facilita el acceso a los ciudadanos–, ojalá que esto sirva para que se pueda tener un efecto propagativo y se avance fundamentalmente en el interior del país.

Brevemente, ¿qué destaco de este proyecto? Primero, la legitimación activa amplia, tanto para las personas privadas como para las personas jurídicas. El hecho de acceder a la información.

El principio de gratuidad, que no es un tema menor porque, incluso, así como se cuenta con la gratuidad para el acceso a la información, cuando esa información viene de la mano quizá de un volumen de una documental muy fuerte, también queda reservada para la reglamentación la posibilidad de que se especifique la manera en que ese ciudadano pueda contar con esa información relevante.

El principio de informalidad. Esto es, acceder a la información desde una nota escrita o por una nota mediante correo electrónico. Es decir, la informalidad para el manejo de la información pública.

Y lo más fuerte, los números de actores del Estado que están obligados a brindar información. Aquí sí está la gran diferencia con el decreto 1.172. No solamente el Poder Ejecutivo con sus organismos descentralizados, sino también el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa; las sociedades donde el Estado sea parte, ya sea como una sociedad anónima, sociedad de economía mixta y el Estado tenga una participación estatal mayoritaria; las sociedades donde el Estado sea parte, con una participación minoritaria, en la medida o en el porcentaje en que el Estado es parte. Los concesionarios o prestatarios de servicios públicos cuando la base justamente de la prestación es un servicio público. Y así como el Estado tiene la obligación de garantizar el debido control y funcionamiento, esos organismos, por más que estén en manos privadas, tienen la obligación de brindar información. Y vaya que sirve un instrumento de estas características, justamente a días de celebrarse una audiencia pública y las cosas que uno podría dilucidar con tiempo, contando con una herramienta que hoy no tenemos.

Rescato la amplitud y la generosidad del proyecto, porque no mira la inmediatez. Esta es una ley que tiende a perdurar en el tiempo. Algunos dicen que es una ley tan amplia que puede molestar al poder. Y creo que en la medida que se moleste al poder, que se lo interpele, que los funcionarios rindan cuentas, que todos los días los legisladores y los ciudadanos pidan informes, nosotros vamos a ir cerrando ese círculo del distanciamiento que existe entre la sociedad y la función pública.

Y para eso hay que avanzar decididamente con saltos de calidad. El primer gran salto lo hemos dado con las correcciones, porque somos Cámara revisora y trabajamos seriamente; y con la ley del arrepentido, que estoy convencido de que la Cámara de Diputados acompañará y será aprobada.

Esto viene de la mano y tiene mucho que ver con la búsqueda de calidad democrática que requiere el país. Voy a dar un ejemplo de la importancia que tiene justamente esta ley de acceso a la información pública.

En un país como el nuestro, la Argentina, muy marcado a fuego por los vaivenes económicos, muchas veces las herramientas legislativas que vienen de la mano de la búsqueda de calidad institucional pasan a un segundo plano. Y no podemos condenar a los ciudadanos, porque ellos viven día a día, planifican su vida con un horizonte de previsibilidad que tiene que brindar el Estado o quienes lo administran. Pero lo que no podemos perder de vista desde la política, fundamentalmente, es que la calidad democrática e institucional y el buen gobierno van de la mano. No hay calidad democracia ni buen gobierno con debilidad institucional.

Los países que avanzaron en la calidad institucional son los países previsibles, los que no solamente generan la previsibilidad para las inversiones, sino también en el día a día de sus ciudadanos. Y estos instrumentos en los hechos de corrupción son tan importantes para el gobierno actual, para la fiscalización ciudadana, para la fiscalización de quienes ejercemos representación legislativa o para la organización de la sociedad civil como lo fue el decreto 1.172.

Quiero dar otro ejemplo. Muchos de los que quizás en 2006 fuimos parte de este Senado recordaremos cuando el senador Morales, juntamente con Ernesto Sanz, por medio de este decreto requirió un informe al Poder Ejecutivo por una ampliación presupuestaria. Y en ese año, según los informes que brindó el Ejecutivo, había una ampliación presupuestaria de 1.300 millones de pesos. Y entre algunos puntos que decían “varios” se destinaban 592 millones de pesos para pagar al grupo Greco.

Con el 1.172, el instrumento gestado por el expresidente Néstor Kirchner, se tomó nota de que entre los “varios” estaban estos 592 millones de pesos. Esto desencadenó una denuncia y se dejaron sin efecto todos los actos administrativos precedentes del Estado en el expediente para facilitar ese pago. ¿Y cómo terminó la cosa? El Estado se ahorró de efectivizar 592 millones de pesos que iban a un gran agujero negro de algunos negocios de algunos funcionarios, lo cual se frenó con un simple informe que brindó el Ejecutivo.

Entonces, sé que hay algunos integrantes del oficialismo que van a proponer algunas modificaciones en este proyecto, aunque antes del ingreso en el recinto pensábamos que se acompañaba por unanimidad tal cual venía de Diputados. Si hay correcciones, habrá tiempo para hacerlas en función de algunas observaciones que, incluso, fueron puntualizadas en el último plenario de comisiones. Pero esta herramienta hay que tenerla ya, porque es mucho más valiosa de lo que se cree. No se trata de la publicidad o de la rendición de cuentas. Es un freno al abuso del poder y a la discrecionalidad. Y es brindar un mensaje muy potente y fuerte de que la política asume el desafío de corregir rumbos, desde la ley del arrepentido, para que los jueces actúen y avancen con un nuevo instrumento en los delitos contra la función pública, pero también para decir que esta Cámara no es inexpugnable y si cualquier ciudadano quiere un informe para saber el entramado interno del Senado de la Nación, de la Cámara de Diputados, del Poder Judicial, de la Corte Suprema, ahí están para rendir cuentas. Así que ojalá al final del camino terminemos con el acompañamiento y, si hay algunas observaciones, queden supeditadas para una ley posterior.



**Sra. Presidente.-** Tengo la lista de oradores: García, Crexell, Elías de Perez, Luenzo, Pais, Negre, De Angeli, Fiore, Varela, Pino Solanas, Braillard, Linares, Mirkin, Giacoppo, Rodríguez Saá, Pichetto y Rozas. Son varios.

Tiene la palabra la senadora García.

**Sra. García.-** Señora presidenta: voy a exponer como miembro informante el dictamen en minoría con modificaciones al expediente 17/16, de acceso a la información pública, dictamen de minoría.

En primer lugar –lo había manifestado la semana pasada en reunión de comisión–, quiero destacar la labor que han realizado desde el plenario de comisiones los presidentes de las tres que trabajaron durante todo este proceso. Me refiero a los presidentes de la Comisión de Presupuesto, de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Y quiero hacer un especial reconocimiento a todo el equipo de la Comisión de Asuntos Constitucionales que ha trabajado junto a todos los senadores y senadoras, receptando todas las modificaciones y propuestas que hemos hecho desde cada uno de nuestros equipos de trabajo.

En absoluta consonancia con lo que planteaba el senador Naidenoff, creo que es muy importante que hoy estemos aquí discutiendo este proyecto de ley venido en revisión de la Cámara de Diputados. Debemos decir a su vez –también lo ha manifestado el miembro informante del dictamen de mayoría– que esto viene a complementar y completar aquel decreto 1.172/2003 que dictara el expresidente Néstor Kirchner. Y de alguna manera hoy estamos dando un paso más en este trabajo de mejorar cada una de las herramientas que tendrá el Estado nacional para poder quitar la cuestión subjetiva de los gobiernos, ya que es una herramienta para que el Estado nacional cumpla con la obligación de brindar acceso de toda la información pública, de toda la información que sea de interés público y para que nosotros, como ciudadanos, podamos ejercer nuestro derecho a obtener esa información.

Dicho esto, quiero hacer una breve consideración sobre las cuestiones sustanciales que nosotros hemos propuesto en nuestro dictamen de minoría, como incorporar el principio de accesibilidad e inclusión en el artículo 1°. Luego, incorporar todas las modificaciones que se han consensuado también en el artículo 6° y lo que manifestaba el miembro informante, el tema de la gratuidad, que es una cuestión muy importante.

También proponemos modificar el artículo 7°, el ámbito de aplicación, incorporando al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Público de la Defensa, unificándolos en un solo inciso, Ministerio Fiscal de la Nación y Ministerio Público de la Defensa, e incorporar en el inciso e) a la Auditoría General de la Nación y al defensor del pueblo.

Asimismo, propusimos eliminar la palabra “mayoritaria” del inciso g) de este artículo 7° porque entendíamos que de esta manera ampliábamos el margen de aquellas empresas y sociedades del Estado obligadas a brindar información. Y también proponíamos reemplazar el inciso i) del artículo 7° respecto de los concesionarios, permisionarios y licenciarios de servicios públicos, que quedaría redactado de esta manera: “Los entes privados a los que se les haya entregado mediante permiso, licencia, concesión o cualquier otra forma jurídica la prestación de un servicio público o el uso, o la explotación de un bien de dominio público en lo atinente a la utilización o actividades desarrolladas con respecto a dicho servicio público, uso o explotación del bien de dominio público y los contratistas, prestadores y prestatarios bajo cualquier otra forma o modalidad contractual”. Esta modificación, que también estaba introducida en Diputados, lo que hace es incorporar este concepto.

También hemos propuesto otras modificaciones. Y quizás una, también sustancial, tenía que ver con incorporar un nuevo inciso. Si no me equivoco, es el *r*), referido al mismo artículo, respecto de la modificación del capítulo IV de la Agencia de Acceso a la Información Pública. Y también está la creación de una comisión bicameral que pudiera hacer el seguimiento de todo este acceso.

Nosotros centramos lo sustancial de este proyecto en el modelo de la Agencia de Acceso a la Información Pública...

**Sra. Presidente.-** Señora senadora García: el senador Fuentes le solicita una interrupción. ¿Se la concede?

**Sra. García.-** Sí, señora presidenta.

**Sra. Presidente.-** Tiene la palabra el señor senador Fuentes.

**Sr. Fuentes.-** Señora presidenta: ¿estamos en el artículo 7°?

**Sra. Presidente.-** Continúa en el uso de la palabra la señora senadora García.

**Sra. García.-** Sí, en el artículo 7°.

Ahora continuamos con el artículo 8°, que tiene que ver con la cuestión de los datos personales y de la información sensible. En este sentido, había propuestas del senador Rozas y de la senadora Lucila Crexell, y se propuso modificar el inciso *i*) del artículo 8° con relación a la información sensible, teniendo en cuenta la información referida a los datos personales de carácter sensible o el régimen que lo sustituya, salvo que se contara con el consentimiento expreso de la persona a la que se refiera la información solicitada.

También en el artículo 8° se propuso suprimir el inciso *m*), referido a la información correspondiente a una sociedad anónima, sujeta al régimen de oferta pública. Este inciso no se encontraba incluido en el proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo y, según varios especialistas, con esta modificación introducida estarían excluidas de brindar información pública las sociedades como YPF o cualquiera otra similar que cotizase en Bolsa.

En el artículo 14, sobre las vías de reclamo, se propuso también una modificación. Esto tenía que ver con las vías de reclamo y las decisiones en materia de acceso a la información pública. Nosotros hemos propuesto en nuestro dictamen que las decisiones en materia de acceso a la información pública son recurribles directamente ante los jueces de primera instancia con competencia en lo contencioso administrativo federal, sin perjuicio de la posibilidad de interponer el reclamo administrativo pertinente ante la Agencia de Acceso a la Información Pública o el órgano que corresponda. Según el legitimado pasivo, será competente el juez del domicilio del requirente o el del domicilio del ente requerido, a opción del primero. Esta es la modificación que proponíamos respecto del artículo 14, conforme a la observación del doctor Loreti, uno de los expositores en las jornadas de debate respecto de este proyecto de ley, quien expuso en la reunión plenaria del 23 de agosto.

Ahora sí, respecto al capítulo IV y en cuanto a la conformación y naturaleza jurídica de la Agencia de Acceso a la Información Pública, nosotros proponíamos la modificación del artículo 19 en adelante respecto a quién debía tener justamente el control o en realidad la autoridad de contralor. O sea, ¿de quién debe depender esta agencia? Nosotros entendemos que debe ser de un ente autárquico, que funcione con autonomía funcional. En este caso, el proyecto original lo establece en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional. En cambio, nosotros entendemos que debe haber un ente con personalidad jurídica propia, dependiente del Congreso Nacional. Es decir, trasladar la autoridad de control desde el Poder Ejecutivo nacional hacia el Congreso Nacional. ¿En virtud de qué? De todas las exposiciones y de las opiniones de las organizaciones que

han venido a este Senado y han manifestado que es complejo, por no decir casi imposible, que el Poder Ejecutivo se controle a sí mismo, independientemente del gobierno que ejerza en este momento la titularidad del Poder Ejecutivo.

En todas las exposiciones se ha enfatizado la necesidad de que este ente tenga independencia funcional, para poder justamente llevar adelante una tarea que sea eficiente, transparente y que cumpla con los desafíos y con los objetivos planteados a lo largo de todo el articulado.

A partir de modificar la naturaleza jurídica y la dependencia de la Agencia de Acceso a la Información Pública, se modifican los artículos siguientes, que tienen que ver con la designación de los directores.

En este sentido, nosotros proponemos un cuerpo colegiado de directores que conformen esta agencia con un total de siete miembros, con una duración en sus cargos durante cinco años, que puedan ser reelegidos. En este caso, hemos dejado la misma duración o plazo que habían establecido el proyecto venido en revisión y el dictamen en mayoría, teniendo en cuenta también la legislación comparada de México, Chile y España y los proyectos presentados por los senadores Rozas, Abal Medina y Petcoff Naidenoff, así como el presentado por la senadora Giacoppo; los cuales también habían propuesto órganos colegiados con directorios que variaban en su composición entre tres, cinco o siete miembros.

También propusimos modificaciones respecto del procedimiento de selección. Aquí hay una cuestión muy importante. Nosotros proponemos la selección de los directores, seis de ellos designados por resoluciones de las dos cámaras del Congreso de la Nación, correspondiendo la designación de tres directores a la Cámara de Senadores y tres a la Cámara de Diputados, observándose como siempre el Reglamento y la representación proporcional de los partidos políticos de cada una de las cámaras; un procedimiento de selección y de designación del director general propuesto por el partido político de la oposición con mayor número de legisladores en el Congreso.

Esto estaba de alguna manera en sintonía con las modificaciones propuestas – insisto– por el senador Rozas y por la senadora Morandini, aunque el órgano que creaba si no me equivoco el proyecto de la senadora Morandini en su artículo 22 era el del defensor, a diferencia del directorio.

En cuanto a legislación comparada, este procedimiento lo contienen la legislación mexicana, chilena y española. Y también algunos de los especialistas en la materia avalaron este tipo de composición.

Respecto al artículo 22, sobre el rango y la jerarquía del director, nosotros suprimimos este artículo, porque al dejar de estar en la órbita del Poder Ejecutivo este ente, no podríamos asimilar claramente la jerarquía de un director en la administración pública nacional, ya que el Poder Legislativo tiene otro régimen.

Con relación al artículo 23, eliminamos algo fundamental que muchos senadores y senadoras entendieron como *capitis diminutio*, que es justamente que el director propuesto no puede haber desempeñado cargos electivos o partidarios en los cinco años previos a su designación.

También en el artículo 26, con respecto al cese del director de la Agencia de Acceso a la Información Pública, modificamos la redacción, porque estaba en singular y ya que establecemos un cuerpo colegiado, lógicamente el término debe quedar en plural.

En el caso de la remoción del director de la agencia, en el artículo 27 también se introducen modificaciones, con el fin de considerar la nueva composición de dicha agencia colegiada, conformada por directores y asimismo teniendo en cuenta la creación de una comisión bicameral, que no se encontraba en el proyecto de ley en revisión.

Respecto al artículo 28, reemplazamos el último párrafo. Este artículo tiene que ver con todos aquellos organismos de acceso a la información pública que mediante la ley establecemos que deben preverse tanto en el Poder Legislativo –con lo cual hay que cambiar aquí, dado que nosotros modificaríamos la dependencia funcional–, como en el Poder Judicial y en los ministerios públicos. De modo que se reemplaza esta terminología y el último párrafo respecto del número de directores, que puede ser menor a lo establecido en la presente ley. Recordemos que nosotros proponemos un cuerpo colegiado de siete miembros y que deberá realizarse mediante un procedimiento de selección abierto, público y transparente que garantice la idoneidad del candidato.

En el artículo 29, respecto del Consejo Federal para la Transparencia se suprime la frase señalada en el segundo párrafo. En cuanto a la representación que deben tener en el Consejo, que está integrado por un representante de cada una de las provincias y un representante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dice el artículo original que deberán ser los funcionarios de más alto rango en la materia de sus respectivas jurisdicciones. Suprimimos la frase señalada con el fin de no exigirles a las jurisdicciones, justamente, qué rango de funcionarios deberían integrar el Consejo.

En el artículo 34 también tenemos algunas excepciones a la transparencia activa. En el mismo sentido que en el artículo 8º, y con idénticos fundamentos, agregamos: y la incorporación de información de carácter sensible en los términos del artículo 2º de la ley de protección de los datos personales número 25.326 y sus modificatorias o el régimen que eventualmente lo sustituya.

Luego, tenemos la incorporación de los artículos 35 y siguientes, respecto de la conformación de esta Comisión Bicameral de Acceso a la Información Pública. Se determina su composición, el personal y las demás funciones de la comisión bicameral.

Luego, están los artículos 38 y 39, que son las cláusulas transitorias. En el artículo 38 figura la cláusula transitoria 1, y en el artículo 39, la cláusula transitoria 2.

Por último, en el artículo 42, si no me equivoco, a propuesta del secretario Adrián Pérez lo que se hizo fue fusionar ambas cláusulas transitorias. Es decir, que a ambas cláusulas transitorias las incorporamos en un solo texto, quedando redactado el artículo 42 de la siguiente forma: “Los sujetos obligados contarán con el plazo máximo de un año desde la publicación de la presente ley en el Boletín Oficial para adaptarse a las obligaciones contenidas en la misma. En dicho plazo conservarán plena vigencia el decreto 1.172 del 3 de diciembre de 2003, así como toda otra norma que regule la publicidad de los actos de gobierno y el derecho de acceso a la información pública”.

**Sr. Fuentes.-** ¿Me permite una interrupción, senadora?

**Sra. García.-** Sí, cómo no.

**Sr. Fuentes.-** En el fragor de la recopilación creo que se traspapeló el inciso del artículo 7º relacionado con los sujetos obligados a brindar información pública. El proyecto de ley que vino en revisión establecía únicamente el Banco Central de la República Argentina, pero se amplió. Entonces, las entidades comprendidas serían las siguientes: el Banco Central, el Banco de la Nación Argentina, el Banco de Inversión y Comercio Exterior, el Banco Hipotecario y las entidades financieras que se creen con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley en el ámbito del sector público.

No sé si se aclaró el inciso i), en cuanto a los entes privados.

**Sra. García.-** Eso sí.

**Sr. Fuentes.-** Perfecto.

Entonces, lo único que falta es decir que en las excepciones se hizo una modificación conforme la estructura normativa. Se distingue seguridad interior de defensa. Se incorporó seguridad interior, que no estaba. La redacción quedaría de la

siguiente manera: “a) Excepciones: información expresamente clasificada como reservada o confidencial, o secreta por razones de seguridad –que fue lo que se incorporó–, defensa o política exterior”.

**Sra. Presidente.-** Continúa en el uso de la palabra la senadora García.

**Sra. García.-** Esta es nuestra propuesta y la sometemos a consideración.

Quiero destacar nuevamente el trabajo de todos los senadores y senadoras con todos los proyectos, y el de la comisión, que se encargó de recopilar y receptar cada una de nuestras modificaciones a una ley que es buena, a una ley que debemos mejorar, seguramente, que debemos lograr que sea una herramienta verdaderamente útil, eficiente y que cumpla con el objetivo y el desafío de que finalmente todos los ciudadanos podamos tener acceso a la información pública. Y que además sea una obligación del Estado brindarla en las condiciones que planteamos en nuestro dictamen.

**Sra. Presidente.-** Senadora Crexell.

**Sra. Crexell.-** Señora presidenta: en principio, quiero resaltar la necesidad de que la Cámara revisora cumpla con su rol, pues la verdad es que hemos estado trabajando en esta ley por lo menos dos meses. Hemos escuchado una gran cantidad de expositores de primer nivel, y todos coincidimos en la importancia de tener una ley de acceso a la información pública.

La verdad es que no es alentador para la institucionalidad encontrarnos con que, de golpe, para que salga una ley rápido, tengamos que no aceptar algunos cambios que son muy importantes. Máxime cuando hay errores que son graves para la institucionalidad y para la transparencia.

Entonces, me parece que, si vale hacer cambios para la ley del arrepentido, ¿por qué no vale hacer cambios para la ley de acceso a la información pública si se trata del mismo planteo? Creo que los dos institutos que estamos tratando son de enorme trascendencia para el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas.

Hay un tema que me preocupa sobremanera y que es al único que me voy a remitir por cuestiones de tiempo. En cuanto al resto, voy a insertar el discurso. Me refiero a la modificación que se introdujo en Diputados vaya a saber por quién. Aparentemente, por algún monje negro del Poder Ejecutivo; los rumores dicen eso. Se trata, justamente, del inciso m) del artículo 8º, en el que se excluye a las sociedades anónimas con capital estatal mayoritario que cotizan en Bolsa de ser pasibles de brindar informes cuando se les exige información.

Además, este inciso contraría el fallo “Chevron”, que si me permite la señora presidenta voy a leer lo que dijo la Corte en su momento. La Corte destaca que la libertad de información es un derecho humano fundamental y que abarca el derecho a juntar, transmitir, publicar noticias. Contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, que tiene por objeto asegurar que toda persona pueda conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñen. Con base en estos principios, la sentencia destaca que el Poder Ejecutivo nacional no solo dispone del 51 % de las acciones de la sociedad, sino que además ejerce un rol preponderante en su gobierno, y cuenta con el poder para determinar sus decisiones. Este poder se ve manifestado, entre otros aspectos, en el hecho de que la presidenta de la Nación haya designado al gerente general y el ministro de Economía forme parte del directorio. Por ello, la Corte arribó a la conclusión de que YPF S.A. se encuentra bajo la órbita del Poder Ejecutivo nacional y por lo tanto debe permitir a cualquier persona el acceso a la información relacionada con sus actividades. La empresa desempeña importantes y trascendentes actividades en las que se encuentra comprometido el interés público, por lo que no puede admitirse, en el marco de los

principios de una sociedad democrática, que se niegue a brindar información que hace a la transparencia y a la publicidad de su gestión. YPF S.A. no puede ampararse en normas destinadas a la búsqueda de eficiencia económica y operativa para evadir la obligación de garantizar y respetar el derecho de acceso a la información, más aún si se considera que este derecho corresponde a cualquier persona para ejercer el control democrático de las gestiones estatales.

Además, quiero decir que YPF es un caso trascendental en la economía de mi provincia, y que tiene mucho que ver con la situación que está viviendo no solo el Neuquén, sino también el resto de las provincias petroleras. Digo esto porque ha sido la encargada de diseñar el plan de negocios y, en cierta medida, la gestión o la política energética del país. Proyectaron la explotación de un yacimiento con un barril de petróleo a 102 dólares y hoy nos encontramos con que lo tenemos a 40, con un subsidio de 20 dólares.

Entonces, sobre las decisiones de los CEO y de personas que son designadas por el Poder Ejecutivo nacional nosotros no tenemos ningún control; máxime cuando están en juego nuestros recursos naturales, que son no renovables, y sobre los cuales se liquidan las regalías que van a las arcas de los estados provinciales para reconvertir estas industrias. Entonces, no me parece que estas sean cuestiones menores.

Además, hay otra cosa que es llamativa. El inciso *m*), en el que se plantea esta excepción, es el único que se refiere a un sujeto y no a la naturaleza de la información que se excluye, como se planteó originalmente. Había empresas con capital estatal mayoritario que podían exceptuarse respecto de información sensible, información que pudiera vulnerar algunos resultados económicos, etcétera. Sin embargo, este no es el caso, se exceptúa directamente al sujeto, a la empresa.

Entonces, me parece que no son cosas que, después, podamos plasmarlas en una ley posterior. Creo que la oportunidad es ahora, sobre todo para cumplir con un fallo de la Corte, que es bastante reciente y que todavía no podemos saber, en definitiva, qué se ha celebrado en ese acuerdo YPF-Chevron, que por algún motivo lo siguen sin mostrar.

Considero que estas son las cosas que hacen que nosotros garanticemos ese control, esa *accountability*, la responsabilidad que tenemos como Poder Legislativo: nuestra función no solamente es legislar, sino también controlar. El control tiene que ver con la posibilidad de acceder a la información, en este caso, de empresas que, según la doctrina publicista, están regidas por el derecho público. Hoy, el ministro de la Corte, Rosatti, cuando le pregunté si YPF debía estar sometida al acceso a la información pública, dijo claramente que sí. Así que, por eso, señora presidenta, es que presenté un dictamen en minoría y lo pongo a consideración de mis pares.

**Sra. Presidente.-** Perdón, no lo había visto, senador Fuentes.

Tiene la palabra para una aclaración.

**Sr. Fuentes.-** La sustitución de la materia por la identificación del sujeto hace a la vieja doctrina de pegale al chanco que aparece el dueño.

Quiero decir que, en el dictamen con modificaciones a la media sanción, en el artículo 8º, el inciso *m*) lo hemos suprimido en función de los argumentos que ha indicado la señora senadora.

También es bueno señalar que esta vocación republicana tan importante de la Corte Suprema sobre la información sería deseable que la extendiera a la información sobre los bienes de los magistrados, por ejemplo. Estos días hemos recibido la novedad de que tanta transparencia republicana vale para afuera y no para adentro.

**Sra. Presidente.-** Tiene la palabra la senadora Giacoppo.

La senadora Fiore le pide una interrupción.

**Sra. Fiore Viñuales.-** Muchas gracias a la señora presidente y a la señora senadora, muy amable.

Simplemente, quiero hacer una propuesta. ¿En qué sentido? Existen tres dictámenes. Han hecho uso de la palabra los tres miembros informantes y antes de empezar el debate somos muchos los que estamos inscriptos. En lo personal, adhiero al dictamen en minoría.

Uno de los senadores planteó que había una propuesta de acuerdo que la iban a dar a conocer después. Quizá, si dan a conocer la propuesta de acuerdo antes, algunos senadores resolvamos no hablar o, en definitiva, no hablaremos en ese sentido. En una de esas, con relación al tema del acuerdo, estamos de acuerdo y quizá se eliminen oradores, se pueda acortar el debate o, de última, precisarlo, que me parece que es importante.

**Sra. Presidente.-** Le pide una interrupción, senadora Giacoppo, el senador Pais para contestarle a la senadora Fiore.

**Sr. Pais.-** En principio –luego, haré uso de la palabra para analizar la ley–, nuestro bloque y el bloque que preside el senador Rodríguez Saá hemos analizado el tema. En función de que había coincidencias básicas y había un reclamo de que esta Cámara actuase como Cámara revisora y, en la inteligencia de que había dos aspectos fundamentales –más allá de que existen otros aspectos para enriquecer este proyecto, que merecen un debate porque necesitamos acuerdos primarios, por ejemplo la autoridad de aplicación, el legitimado pasivo, que desde diferentes ámbitos hay distintas propuestas para consensuar– y esenciales, entendíamos que no merecerían mucho análisis y que podían pasar para un trámite muy acelerado en Diputados.

Estos dos aspectos son: a la autoridad de aplicación prevista originalmente incorporarle el necesario acuerdo del Senado, ello como garantía de que en este proceso de selección también intervenga otro poder del Estado y para que pueda constituirse en una autoridad válida para el ejercicio que le asigna la ley, en función de los otros poderes del Estado: el Poder Legislativo y el Poder Judicial.

Otro aspecto fundamental se relaciona con la eliminación del último párrafo del artículo 23, sobre el que ampliaré cuando haga uso de la palabra, que nos parecía un absoluto error y una afrenta a la Constitución Nacional, al incorporar una veda, hasta con redacción deficiente, porque hablaba, si mal no recuerdo, de cargos electivos y partidarios. Se sobreentiende, porque además no lo dice, lamentablemente, que se estaba hablando de partidos políticos, pero ni siquiera los menciona, que son entidades fundamentales de la democracia, conforme lo expresa el artículo 38 de la Constitución Nacional y otros artículos específicos. Si mal no recuerdo, los artículos 54, 77 y 99 de la Constitución hablan de los partidos políticos y le asignan un rol esencial y fundamental en la democracia.

Además, respecto de la ambigüedad de hablar de cargos electivos, entendemos que la Cámara de Diputados se estaba refiriendo también a cualquier cargo electivo de índole política, porque ni siquiera lo aclara. Puede ser hasta cargo electivo de entidades de bien público, de entidades deportivas, etcétera. Si aún hablamos así, abarcaría desde un concejal, pasando por intendentes, gobernadores, legisladores provinciales, legisladores nacionales y hasta el propio presidente de la Nación, no existiendo tal limitación para otro tipo de funcionarios políticos, como puede ser desde el jefe de Gabinete de la Nación, que es el jefe de la administración pública, un exjefe de Gabinete, hasta un secretario de algún municipio de la República Argentina.

En estos aspectos y en lo esencial, creyendo que estos fueron errores, incluso manifiestos, hemos llegado a un acuerdo como para que, sin tocar el tronco de la ley,

que merece un debate y que va a determinar otras iniciativas parlamentarias para consensuarlo, actuemos rápidamente, le demos sanción y que la Cámara de Diputados pueda poner en práctica esta norma, eliminando estos dos aspectos que son, esencial y unánimemente, criticados por todo este Senado. Esta es la respuesta a la consulta.

**Sra. Presidente.-** Senadora Giacoppo, le siguen pidiendo interrupciones: el senador Naidenoff y la senadora Crexell.

Primero estaba el senador Naidenoff.

**Sr. Petcoff Naidenoff.-** Como se hablaba de un principio de acuerdo, la verdad es que le diría a la senadora que tranquilamente continúe con el uso de la palabra, porque solamente los acuerdos los pueden cerrar los presidentes de bloque y yo desconozco si ha existido acuerdo respecto de esos dos puntos.

Por lo tanto, nuestra posición es sostener el proyecto...

**Sr. Fuentes.-** Una aclaración...

**Sr. Petcoff Naidenoff.-** Sí, cómo no.

**Sra. Presidente.-** Una aclaración, senador Fuentes.

**Sr. Fuentes.-** No se dijo un acuerdo de la totalidad de los presidentes, sino un acuerdo entre el bloque del Frente para la Victoria y el Peronismo Federal. Usted malinterpretó, senador.

**Sra. Presidente.-** Senador Naidenoff, ¿continúa o terminó?

**Sr. Petcoff Naidenoff.-** Nada más.

**Sra. Presidente.-** Senadora Giacoppo, ¿le da una interrupción a la senadora Crexell?

Senadora Crexell.

**Sra. Crexell.-** Sí, lo que quiero solicitar, obviamente, es que, si se van a introducir cambios, se elimine el inciso m) del artículo 8º. Para mí es sustancial ese inciso.

En todo caso, si YPF no quiere dar información, que se ampare en las excepciones que están contempladas respecto de la calidad de la información y no de la naturaleza del sujeto.

No tiene ningún fundamento ese inciso que han introducido en Diputados.

**Sra. Presidente.-** Le sugiero, senadora, que como es un tema que después será tratado, proponga la modificación en el momento de la votación, para no dejar a la senadora Giacoppo que está, desde hoy, queriendo hablar.

Senadora Giacoppo, ahora sí puede hablar.

**Sra. Giacoppo.-** Señora presidenta, voy a justificar mi voto positivo muy escuetamente, porque esta ley tuvo un amplio debate muy enriquecedor, en el que tuvimos la oportunidad de escuchar a muchos expertos.

Creo que la Argentina adeuda una ley. Esta ley que va en consonancia con los ejes de este gobierno, un gobierno abierto, un gobierno que quiere mostrar sus actos públicos, su administración para la gente y que todos los ciudadanos tengamos la oportunidad de acceder a la información pública. Es una ley fundamental para una democracia madura, porque con esta ley vamos a construir una democracia sólida, una democracia inclusiva, una democracia igualitaria.

Hoy tenemos un decreto, pero un decreto que cuando se solicitaba en estos años, desde el año 2003...

- Murmullos en el recinto.

**Sra. Presidente.-** Perdón, senadora. Le pido a los senadores que hablen un poco más bajo, porque la senadora les dio la palabra a todos y también merece respeto como todos.

Adelante.



**Sra. Giacoppo.-** En este decreto, cuando solicitábamos información pública y no se nos la daba, no había un organismo que penalizara o castigara al órgano del Estado que se negaba a informar.

Esta información es necesaria para el cumplimiento de nuestros derechos ciudadanos. Tuvimos múltiples debates en estos quince años. En tres oportunidades se trató de sancionar una ley y hoy tenemos la posibilidad de hacerlo. Realmente, este tercer debate nos lleva a que hoy solo tres países en Latinoamérica –la Argentina, Venezuela y Bolivia– no tengan una ley. Por lo tanto, esto significa cumplir con esta deuda pendiente y con las buenas prácticas de la política de las que siempre se habla.

No debemos desaprovechar esta oportunidad. Por supuesto, esta norma podría ser perfectible y podríamos hacer muchos aportes como Cámara revisora, pero no teniendo la intención de cercenar el aporte de esta Cámara, considero que la búsqueda de lo mejor nos puede impedir tener lo posible, y hoy lo posible es muy bueno.

Entonces, tenemos esta oportunidad, no la desaprovechemos. Realmente, el país está esperando este gesto de todos nosotros, que es un gesto de grandeza y un gesto que muestra a un gobierno que, más allá de las críticas y de las diferencias que pueda tener en esta Cámara, es un gobierno que tiene la intención de no ocultar sus actos. Considero que esta es una oportunidad, porque el mismo gobierno nos está diciendo: “Contrólenme”, y se está poniendo a disposición con una ley tan clara, ya que enuncia los sujetos pasivos, el órgano de control y abarca a los tres poderes del Estado.

Realmente, no desaprovechemos, reitero, esta gran oportunidad. Nada más, señora presidente.

**Sra. Presidente.-** Muchas gracias, señora senadora.

Tiene la palabra el senador Pino Solanas.

**Sr. Solanas.-** Gracias, señora presidenta.

Como bien se ha dicho antes, y asumiendo muchos de los argumentos de la buena exposición de la senadora Crexell, estamos ante una ley mayor, sobre todo mirando a la historia argentina de estas últimas décadas y frente a un fallo ejemplar que reafirma, con todas las letras, el derecho ciudadano a tener acceso a la información pública de los actos de gobierno.

Este proyecto de ley que, en su generalidad, por supuesto, apoyamos y respecto del cual, seguramente, estaremos de acuerdo con muchas de las observaciones que se hacen, tiene el límite de que frente al ropaje de las buenas intenciones esconde tantas excepciones, limitaciones y requisitos que lo hacen, yo diría, más restrictivo de lo que es el decreto 1.172/3, de Néstor Kirchner. Se afirma que esta norma va a asegurar la transparencia informativa, pero, en realidad, no es exagerado decir que en muchos aspectos está ayudando al ocultamiento de la información. Nosotros presentamos también un proyecto, que no sé por qué no tuvo dictamen, pero hicimos nuestro propio proyecto.

Ahora bien, hay dos temas mayúsculos que acá se han mencionado y donde yo voy a poner el acento. El primero de ellos, establece excepciones. Entre las excepciones que establece en el artículo 8° plantea una excepción tan cuestionable como es el inciso m), de información correspondiente a una sociedad anónima sujeta al régimen de oferta pública.

En verdad, señora presidenta –y ahora me entero que este artículo fue introducido por la mano misteriosa que siempre aparece en estas cosas–, si en las sociedades anónimas y, además, con mayoría estatal, ni los legisladores ni los magistrados pueden enterarse de sus operaciones, ¡estamos en el horno! ¡Este inciso fue escrito exactamente en la cresta de la ola del conflicto con Chevron!

Vergüenza o, mejor dicho, expresión de la degradación institucional en la que estamos viviendo es que el fallo de la Corte para hacer público el contrato firmado entre YPF y Chevron es de noviembre y fue ratificado. Hasta el día de la fecha, el gobierno que continuó al gobierno que lo había firmado ¡lo mantiene oculto! Ahora, YPF es una sociedad con mayoría estatal y, además, los argentinos pagamos 6.000 millones de dólares para recuperar el 51 % de YPF. Y lo que eso oculta es el objetivo de sacar del control público.

Si nosotros sacamos del control público las grandes operaciones que realizan las empresas públicas o las empresas sociedades anónimas con mayoría estatal, la verdad que no sé qué es lo que nos queda, porque YPF ha escapado al control de la Auditoría General de la Nación.

Entonces, nos parece realmente grave que el fallo de la Corte todavía no haya sido contestado debidamente entregando el contrato. Les informo que yo soy uno de los que acompañó el excelente recurso de amparo que presentara el exsenador nacional Rubén Giustiniani. Y estamos viendo una danza más parecida a la pirueta jurídica que a un trámite serio. Van de un lado para el otro, vuelve a la Corte, baja a la cámara, va al juez, en fin. Esta suerte de tango patético institucional nacional da que hablar. El fallo de la Corte es muchísimo más abarcativo que este proyecto que vamos a votar.

El otro tema es que dejemos de colocar al lobo o al zorro cuidando el gallinero. Digo esto porque el artículo 19 crea la Agencia de Acceso a la Información Pública dentro de la órbita del Poder Ejecutivo, con la nominación de su presidente y de sus integrantes. Ciertamente, no sé cómo va a poder controlar el Poder Ejecutivo la información pública de esta manera.

La información pública no es un tema exclusivo o excluyente del Poder Ejecutivo. Es como cuando aquí se votó la ley de medios. El corazón de la ley de medios en todas partes del mundo, en los grandes debates por la democratización del sistema mediático y para asegurar la calidad de ese gigantesco espacio, que es el espacio mediático de la información pública, lo que se hace es crear organismos que contrabalancean a los gobiernos de turno, al Poder Ejecutivo. Se crean cuerpos ejecutivos surgidos de un concurso público de oposición y antecedentes, y el control de ese órgano ejecutivo son consejos consultivos o asesores integrados por representantes del conjunto plural de la sociedad.

Acá estamos muy lejos de eso. La verdad es que creo que esto es absolutamente limitativo y muy negativo.

Vivimos en una Argentina donde la pauta publicitaria responde al arreglo político de los dueños de las televisoras y las radios, donde hay prohibiciones para que a donde va Fulano no vaya Mengano. Todas esas cosas las estamos viendo a diario.

Entonces, me parece que el proyecto, tal como está redactado, por lo menos, necesita una seria corrección en el sentido de que, de ninguna manera, se puede negar acceso a la información pública de las contrataciones que realicen las empresas del Estado. Al menos, no se le puede negar a ningún legislador o magistrado. Eso es un disparate.

Por eso, digo que son necesarios algunos ajustes para que esta ley pueda cumplir sus objetivos y no termine siendo cómplice del ocultamiento de información y de grandes hechos de corrupción. Porque cuando se oculta la información de grandes contratos... El contrato de Chevron-YPF es un contrato millonario, ¿y por qué se oculta? No se oculta por los problemas técnicos geológicos y la fórmula de la Coca Cola, sino porque hay manejos y cláusulas lesivas al interés de la Nación.

Se elude el control del flujo del dinero, del ida y vuelta, para escapar a los controles fiscales, al control del Estado y para impedir que los fondos sean incautados por los numerosos juicios que de pronto tienen. En fin, todo eso lo sabemos y es historia conocida.

La verdad es que lo menos que hay que hacer es que la cláusula *m)* del artículo 8° sea hecha polvo. Hay que borrarla, muchachos. Esto es una vergüenza.

**Sra. Presidente.-** Tiene la palabra el señor senador Luenzo.

**Sr. Luenzo.-** Señora presidente: en líneas generales, creo que todos coincidimos en la necesidad de esta herramienta que nos da transparencia y nos da la posibilidad de poder acceder a información que hoy está encriptada y que, en definitiva, bajo la responsabilidad que todos tenemos que asumir en un Estado que nos compromete a todos, sería la mejor vía para llegar, justamente, a ese objetivo: a obtener la información de todos los Estados.

Nos encontramos, obviamente, con algunos inconvenientes o problemas de la ley que, a mi criterio, enmascaran principios fundamentales que, justamente, son estos: la transparencia en el acceso a la información.

Voy a coincidir en parte con lo que han dicho los colegas, pero brevemente voy a puntualizar algunos aspectos que me preocupan.

Se establece que el director de la agencia es designado por el Poder Ejecutivo, pero puede ser removido por una bicameral. Yo me pregunto: si esto es así, ¿por qué razón esa bicameral no tiene también las facultades de poder designar a un director para esa agencia en una decisión compartida desde aquí?

La otra cuestión es la representación que debe tener esta agencia. No alcanza con la del Poder Ejecutivo. Creo que debemos pensar en los tres poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y también el Judicial.

Otro de los puntos que ponemos bajo observación, al menos desde nuestro espacio político, tiene que ver con quién solicita la información. No se preserva uno de los aspectos fundamentales que ha marcado la OEA, central en todo esto porque es el modelo que plantea para el pedido de la información, como es el anonimato. No tenemos la opción del anonimato para solicitar la información.

Otro de los aspectos que, al menos para quienes vivimos en el interior, es central es que no se trata de una herramienta de orden público. Depende de la adhesión de cada una de las provincias y del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que también debería prestarse atención a ello. Reitero, debería ser una herramienta de orden público.

En aquellos sujetos obligados, tema que hemos hablado hasta recién, entiendo que la iglesia católica también debería estar como sujeto obligado a dar información. Y lo digo por la historia, por un pasado no tan lejano en la República Argentina y por la información que guarda celosamente acerca de lo que pasó en los momentos más tristes de este país en la década del 70. Me parece que la iglesia católica también debería estar abarcada por este principio de ser sujeto obligado.

Las excepciones, como se ha dicho hasta aquí, son muy amplias. No abundaré porque ya lo han hecho los senadores Crexell y Pino Solanas.

El inciso *b)*, sobre el secreto bancario, me parece que es una excepción que también habría que revisar. Obviamente, los secretos comerciales que abarcan el tema Chevron. Me hago esa pregunta, por ejemplo.

El inciso *m)* que, tal vez, es el más conflictivo, y sobre lo que hemos escuchado referencias hace instantes nada más, respecto a la información correspondiente sobre una sociedad anónima sujeta al régimen de oferta pública. Este es el caso de YPF.

Y un último punto, al que me quiero referir brevemente y que es muy confuso, es el tema de los datos personales. Creo que deberíamos tener en cuenta, claramente, el tema de los datos sensibles. Una cosa son los datos personales y otra los datos sensibles de cada una de las personas, sobre todo, cuando hablamos de cuestiones de salud, orientación sexual, ideologías y una serie de circunstancias. Me parece que también es un punto a tener en cuenta.

Reitero, nuestro espacio político está totalmente de acuerdo. Creo que es una iniciativa del Poder Ejecutivo nacional que hay que poner en valor y sabemos que está la decisión política de avanzar con ella. Pero creo que se puede hacer una mejor herramienta de transparencia y consolidación del sistema republicano si se corrigen algunos de los aspectos que he mencionado.

**Sra. Presidente.-** Muy bien. Muy breve y concreto senador Luenzo.

Tiene la palabra el señor senador Pais.

**Sr. Pais.-** Señora presidente: esta es una ley trascendente e importante. Una herramienta necesaria para el Estado nacional. Incluso, entiendo la inquietud de algún senador preopinante sobre la necesidad de que sea un mínimo que active la transparencia en todo el sector público nacional y provincial.

Sin perjuicio de ello, atento a las incumbencias constitucionales, evidentemente, cada provincia tendría que adherir mediante sus órganos legislativos en forma autónoma, y no podría dictarse una ley que, aunque sea de orden público, se imponga a los estados provinciales.

Aclarado esto, es una norma importante que, en líneas generales, sigue los parámetros de la más moderna legislación en la materia, especialmente, de la ley marco de la OEA que sirve como propuesta de adopción por parte de los Estados.

Creemos que es una ley absolutamente necesaria.

Más allá de que haya un decreto del Poder Ejecutivo nacional, muchos funcionarios públicos, y no el Estado como tal, hacen de la reserva y del manejo personalizado de los trámites y expedientes que están a su cargo un ámbito esquivo a la publicidad y al acceso de cualquier interesado.

Es una ley que tiene una legitimación activa muy amplia. Basta ser habitante de este país para poder acceder a información que administre y custodie el Estado nacional en todos sus ámbitos. Es una ley que tiene muchos elementos para discutir. Hoy queremos dar una sanción con alguna modificación menor para que, rápidamente, pueda ser sancionada por la Cámara de Diputados y ponerse en valor un derecho humano esencial. Lo dijo la Corte en el fallo a que hacía alusión la señora senadora Crexell. Hablamos de un derecho humano esencial que hace a nuestro sistema democrático y a nuestra forma de gobierno.

No podemos hablar de un sistema de gobierno republicano si no garantizamos que este derecho humano sea ejercido en plenitud por todos los habitantes de nuestro país.

En este marco sí existen cuestiones que seguramente merecen mucho más análisis y acuerdo parlamentario, y seguramente esta ley, de ser sancionada y promulgada, va a tener inmediatamente proyectos modificatorios.

Hay voces disímiles en cuanto al órgano que hará de autoridad de aplicación. Nosotros ya tenemos la experiencia de la acordada 1 del año 2000 de la propia Corte Suprema, que se negó a integrar la Comisión de Ética Pública, que era un organismo que debería funcionar en el ámbito legislativo y que no pudo funcionar a instancias de que el Poder Judicial dispuso la inaplicabilidad –por acordada, no por sentencia– de determinadas normas que, a su entender, violaban la independencia del Poder Judicial.

Es decir, en todos los ámbitos la reserva sigue siendo un valor defendido por quienes administran información pública cuando, en definitiva, la reserva debe ser absolutamente la excepción y debe ser analizada en un ámbito muy restrictivo.

En lo específico me voy a referir a que, más allá de que era una voluntad que yo mismo anuncié en el trámite de la Comisión de Asuntos Constitucionales la de darle sanción a este proyecto, hemos reflexionado, porque justamente cuando hablaba quien está haciendo uso de la palabra sobre la necesidad de darle sanción a este proyecto ya evidenciaba mi crítica a aspectos esenciales como el que referenciaba recientemente del artículo 23, último párrafo, que excluía a los representantes que tuvieron cargos electivos en los últimos 5 años o a quienes ejercieran funciones partidarias, que entendemos que está haciendo referencia a funciones partidarias políticas. Creo que esta es una norma que se les debe haber escapado en el análisis de los legisladores de la Cámara de Diputados, porque es esencialmente antidemocrática y afecta elementos esenciales de la democracia de una República.

Quienes ejercen cargos electivos se han sometido a la voluntad popular. Quienes han ejercido un cargo electivo han sido investidos para ese cargo electivo por la voluntad popular. Quienes ejercen cargos partidarios están actuando en un ámbito necesario y fundamental de la democracia, así lo dice el artículo 38 de la Constitución. Es más, el constituyente del 94 protege de forma esencial a los partidos políticos y a la legislación de partidos políticos: le exige a este Congreso mayorías calificadísimas para poder modificar la legislación de partidos políticos. Cuando reglamentó los decretos de necesidad y urgencia le impidió al Poder Ejecutivo que pueda actuar en materia de partidos políticos, porque hay que protegerlos. Es así como se protege la democracia, y no puede ser que justamente quienes actúen en esos partidos políticos –que además pueden estar incluidos como sujetos legitimados pasivos del acceso a la información– vean vedada la posibilidad de ser candidatos a constituirse en autoridad de aplicación de una ley tan esencial para la democracia como esta.

En ese marco, esta Cámara de Senadores y este bloque –por lo menos así lo hemos analizado– revió la posición que tenía en un principio de tratar de dar sanción a este proyecto de ley para que la Argentina tuviese una ley, una norma de grado superior, regulando una materia tan esencial de este derecho humano de acceso a la información pública, pero hete aquí que tampoco podemos renunciar a nuestro rol revisor y, sabedores de que existen al menos coincidencias mayoritarias de esta Cámara –que espero que sean totales, pero al menos mayoritarias– en cuanto a que no podemos dejar pasar esto que constituye una afrenta para la democracia, al menos no las modifiquemos y reenviemos rápidamente este proyecto a la Cámara de Diputados para que pueda ser sancionada como ley.

Eso sí, no vamos a renunciar tampoco en nuestro rol de legisladores a propiciar proyectos de ley que tiendan a mejorar este estándar de publicidad de los actos de gobierno, a mejorar este estándar de acceso del ciudadano y del particular a los actos de gobierno, y fundamentalmente de mejorar lo que es un gobierno digital, un gobierno abierto, que es lo que propugnamos todos y que incluso ha sido bandera de quien hoy ejerce la primera magistratura.

En ese marco, señora presidenta, recién anunciábamos esas dos modificaciones – y bien puede ser la tercera la propuesta por la senadora de Neuquén– en la inteligencia de que existe una grave contradicción palmaria y manifiesta entre los artículos 7° y 8°, y tal vez se debería eliminar ese inciso. Falta que analicemos esta posibilidad con algunos senadores que no están presentes, pero la mayoría coincidimos en que al menos esa norma se da de patadas hasta con la propia columna vertebral de la ley, que justamente

propicia el acceso amplio y el carácter restrictivo...

**Sr. Fuentes.-** Solicito una interrupción, señora presidenta...

**Sra. Presidente.-** Le está pidiendo una interrupción el senador Fuentes.

**Sr. Pais.-** Cómo no, senador.

**Sr. Fuentes.-** Para aclarar que no es solo la senadora por Neuquén, sino que hay nueve senadores que han firmado el proyecto de minoría en revisión que, precisamente, establece sacar esa restricción que se había establecido, y creo que hay proyectos también fuera de ese dictamen en el mismo sentido.

Quiere decir que hay una amplia vocación para, por lo menos, marcar una conducta con respecto a esa rara incorporación.

**Sra. Presidente.-** Gracias, senador Fuentes.

Continúa en uso de la palabra el senador Pais.

**Sr. Pais.-** Muchas gracias, senador Fuentes, porque ha dado una correcta precisión del tema. Yo invocaba a la senadora por Neuquén porque ha sido pública su manifestación en este recinto, pero es cierto, esta es una de las tantas observaciones que se le habían hecho al proyecto y merecería su análisis.

Lo último para cerrar, presidenta, quiero decir que creemos que la ley en sí mejora el estándar de cumplimiento de este derecho humano esencial de los ciudadanos y de los habitantes de nuestro país.

Incluso, creemos que iniciativas que se van a presentar para mejorar esta ley van a tender a superar ese mínimo estándar de acceso a la información pública que estamos estableciendo y que creemos que es superador de lo que tenemos hoy, porque en esta legislación estamos incorporando órganos y poderes del Estado que estaban ajenos y ausentes a este acceso a la información pública.

Fue un gran avance, y lo debemos reivindicar, lo actuado desde el año 2003 por el gobierno anterior cuando se reglamentó a sí mismo ese acceso a través de un decreto y brindó a los ciudadanos esa posibilidad en forma amplia, la cual ha sido ejercida en amplitud por muchos ciudadanos y por muchas organizaciones no gubernamentales.

En mi caso particular, por ejemplo, yo disiento con que la autoridad de aplicación pueda estar en el ámbito del Poder Ejecutivo, e incluso que intervenga en la designación el Poder Ejecutivo, y creemos que eso hasta puede llegar a ser resistido por el Poder Judicial en aras de la invocación de su independencia. Fíjense que, en este momento, en cuanto al acceso a las declaraciones juradas de los magistrados, existen criterios diferenciados al impuesto por este Congreso de la Nación, y fundamentalmente debemos acordar que en la acordada 1 del año 2000 la Corte también verificó en términos muy restrictivos la incorporación de determinadas normas que hacían a la ética pública, que son esenciales en una república y en una democracia.

En función de esto, señora presidenta, vamos a apoyar en líneas generales este proyecto, vamos a propiciar mínimas modificaciones para que pueda tener un trámite con la celeridad que se merece esta institución que va a garantizar y va a permitir que en plenitud los ciudadanos de la Argentina ejerzan este derecho humano esencial, y fundamentalmente seguiremos trabajando para enriquecer este proyecto de ley para bien de todos los argentinos.

Muchas gracias, señora presidenta.

**Sra. Presidente.-** Gracias a usted, senador Pais.

Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

**Sra. Negre de Alonso.-** Gracias, presidenta.

Kofi Annan, exsecretario general de Naciones Unidas, dijo que el conocimiento es poder, la información libera y la educación es la premisa del progreso.

Hoy tratamos este proyecto de ley que viene en revisión, con media sanción de la Cámara de Diputados, sobre el derecho a la información. El mismo ha tenido una evidente evolución en nuestro país, empezando por la reforma constitucional del año 1994, porque si bien no tiene un artículo expreso y literal al respecto, en los nuevos derechos está contemplado como un derecho implícito el derecho a la información, y está contemplado en el artículo 41 dentro de la garantía del medio ambiente; 42, usuarios y consumidores; 43, en cuanto a los datos personales; 38, en cuanto a los partidos políticos tienen que rendir cuentas y dar publicidad del origen y destino de los fondos. Consecuentemente, existe una fuerte incorporación en esto, por parte de la Constitución del 94, como se ha dicho, en forma implícita.

Creo que el primer fallo fue el de la Corte, del año 97, “Tiscornia contra Ministerio del Interior”, donde se dijo que este derecho estaba incorporado a nuestro derecho interno en la medida de la Convención Americana de Derechos Humanos, desde que se ratifica la Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene sus fundamentos en los artículos 14 y 33.

Cronológicamente, con posterioridad, como lo dijo recién el senador Pais –lo han mencionado todos los senadores–, el presidente Kirchner dictó el decreto 1.172 del año 2003. Se avanzó en ese sentido. Y en 2012 se dictó el fallo de la Asociación Civil de Derechos Civiles contra PAMI, en el que la Corte Suprema de Justicia dejó establecido un reconocimiento bifásico. Por un lado, el derecho al ciudadano del acceso a la información, como derecho individual de buscar la información, y, por otro lado, la obligación positiva del Estado de garantizar que ese ciudadano reciba la información que ha solicitado. El fallo fue reiterado y ratificado por la misma Corte en los autos “Fundación Poder Ciudadano y otro contra la Cámara de Diputados de la Nación”, que era, un poco, a lo que se refería recién el senador Naidenoff, cuando decía que esto involucraba a todos los poderes del Estado.

En el orden internacional, señora presidenta, en el año 2000, la Corte Interamericana de Derechos Humanos elaboró los que se llamaron los Principios de Lima. Y dijo que, a los efectos de proteger el derecho a la información, se debería garantizar, primero, que el acceso a la información es un derecho humano y, como tal, hay que garantizarlo. Segundo, que el acceso a la información, en una sociedad democrática, tiene que tener transparencia y desarrollo. Y tercero, en cuanto a los Principios de Lima con relación a las autoridades estableció que la información pertenece a los ciudadanos; la información no es propiedad del Estado y el acceso a ella no se debe a la gracia o favor del gobierno. Este tiene la información solo en cuanto representante de los ciudadanos. El Estado y las empresas que prestan servicios públicos están comprometidos a respetar y garantizar el acceso a la información a todas las personas y adoptar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para promover el respeto a este derecho y asegurar su reconocimiento y aplicación efectiva. En cuarto lugar, la legislación sobre el acceso a la información; las normas que desarrollan este derecho deben garantizar la máxima transparencia y reconocer que toda persona puede ejercerlo, que la información puede obtenerse en el soporte material indicado por el solicitante o, al menos, en el formato que este disponga. Eso fue en noviembre de 2000. Después, en 2006, la Corte Interamericana reconoció, en los autos “Reyes versus Chile”, el derecho de acceso a la información pública como un derecho humano fundamental.

Nosotros, señora presidenta, hemos firmado el dictamen que mencionó el senador Fuentes y que informó la senadora García. Por supuesto, al artículo 23 lo consideramos como un oprobio. Porque es directamente un escarnio para la política. No

puede ser definido de otra forma, un escarnio a la política. Marginar a los partidos políticos, que están en la Constitución, o marginar a los ciudadanos que, en una democracia libre, han sido elegidos en algún cargo partidario o han tenido su trayectoria, que es para nosotros un honor –pero parece que para el que redactó el artículo 23 es una mancha–, ponerlo como una *capitis diminutio* para ejercer el cargo de director de la Agencia, realmente, es casi intolerable y es casi como para plantear una cuestión de privilegio en contra de quien redactó ese artículo 23.

Los senadores se han referido con mucha minuciosidad. Por supuesto, nosotros creemos que el otro punto neurálgico –lo dije en la comisión– es no solamente la *capitis diminutio*, sino quién integra la agencia. No es porque la agencia sea de control. La agencia, en realidad, no es de control, como algunos han dicho. El que integra la agencia es el que tiene la obligación de dar la información. Entonces, nos parece correcto que esté desvinculado –a través de una concurrencia con el Senado de la Nación– del Poder Ejecutivo o, por lo menos, tenga un contralor por parte del Poder Ejecutivo.

Compartimos todo lo que acá se ha expresado, conjuntamente con lo dicho por la senadora Crexell, lo referente a las exclusiones que hay, y vamos a acompañar el dictamen en estas tres propuestas que han hecho los senadores Pais, Fuentes y la senadora Crexell –estos serían los tres puntos–, vamos a acompañar con nuestro voto para que vuelva a la Cámara de Diputados y esta se pronuncie, si acompaña o si no lo hace. Fundamentalmente, presidente, se trata de que la Cámara de Diputados de la Nación, que conforma el Congreso de la Nación, se pronuncie con este llamado rojo que le hemos hecho, muy fuerte, sobre el artículo 23, porque sería un efecto bumerán.

**Sra. Presidente.-** Muchas gracias, senadora Negre de Alonso.

Tiene la palabra el senador De Angeli.

**Sr. De Angeli.-** Señora presidente: gracias. Primero, pedir autorización para insertar. Pero no puedo dejar pasar este momento histórico para nosotros, la clase política. Porque, cuando recorremos los pueblos, hay mucha desconfianza hacia los políticos, mucha desconfianza con los funcionarios, con los que tenemos cargos. Aparentemente, la historia nos ha jugado una mala pasada. Entonces, hoy, que hay un presidente que quiere transparentar a través de la honestidad y de la sinceridad, no podemos dejar de apoyar esta ley. Quizás se puede mejorar. Y sí, se puede mejorar. Sin embargo, decía el general que los muchachos son buenos, pero si los controla son mejores. Esto es lo que estamos buscando.

**Sra. Presidente.-** Una interrupción le pide la senadora Negre de Alonso.

**Sr. De Angeli.-** Sí.

**Sra. Negre de Alonso.-** Mire, quiero dejar absolutamente aclarado algo. No lo dije expresamente porque no lo creí necesario, pero nosotros estamos con la transparencia, con la investigación de los tres poderes del Estado, absolutamente, senador De Angeli.

**Sra. Presidente.-** No se puede dialogar.

**Sra. Negre de Alonso.-** A través suyo, presidenta, le digo al senador De Angeli que estamos absolutamente a favor de la transparencia, de la información y, como dijo el senador Pais, de los tres poderes del Estado.

**Sra. Presidente.-** Perfecto, senadora.

Senador De Angeli.

**Sr. De Angeli.-** Senadora: le pido disculpas si se sintió aludida. Yo no fui por usted. Yo digo que, cuando se camina por los pueblos de uno y va y recorre, ve que la clase política está hasta desprestigiada. Sin duda, con esta ley que se va a votar, que puede sufrir modificaciones y puede volver rápidamente, mucha más gente va a creer en la



política y se va a inmiscuir en la política. Esta ley va a empezar a fortalecer la democracia. Sin duda, habrá mucha gente que quiera participar en el recambio necesario de la política.

Por eso celebro esto. Porque, cuando un presidente como Mauricio Macri está diciendo prácticamente, a través de estas leyes: “Quiero que nos controlen, queremos mostrar transparencia”, yo me siento parte de este gobierno y lo celebro. La verdad es que, cuando uno escuchaba que alguien decía: “Ay, se metió en política” o “Ya se metió en política”, o por ahí te decían: “Para robar”, yo les decía: “Si por mí te despertaste, podés seguir siesteando”, como muchos de nosotros.

Con esto le vamos a demostrar a la gente buena que tiene que participar en política y que se va a poder transparentar su gestión. Así que yo celebro esto. Y sin duda, esos dineros que tal vez faltan en educación, en salud, en seguridad y en infraestructura, muchos de esos dineros que todos los ciudadanos ponemos y no sabemos a dónde van, ahora, mediante esta ley van a poder saber a dónde van. Sin duda, nos van a poder juzgar el día de las elecciones, o nos van a denunciar. El pueblo va a ser el mejor fiscal que vamos a tener cuando llegue el momento de rendir cuentas.

Voy a ser muy breve porque quiero insertar. Le agradezco esta posibilidad como senador de la Nación. En este momento me siento contento en lo personal porque vamos a ser partícipes de un cambio en la historia y el pueblo argentino va a poder seguir creyendo en la clase política.

Muchas gracias, señora presidente.

**Sra. Presidente.-** Muchas gracias, senador De Angeli.

Tiene la palabra la senadora Fiore.

**Sra. Fiore Viñuales.-** Señora presidente: la verdad que voy a ser muy breve porque, habiendo suscripto el dictamen de minoría, me siento comprendida por las palabras de la senadora García, que explicó muy bien las razones, del senador Fuentes, el concepto de la senadora Negre de Alonso, el concepto de la senadora Crexell y me gustó la propuesta del senador Pais, que por supuesto voy a acompañar.

Respecto de lo que acabo de escuchar, simplemente quiero hacer una reflexión: soy parte de los argentinos que estamos cansados de aquellos que con el dedo acusan a otros desde la comodidad de una mesa de café. A veces es muy fácil hablar de las cosas que hay que hacer en la Argentina y juzgar a los otros, de lo que tenemos que decir o hacer en una banca, mientras no se juegan absolutamente nada. Están sentados tranquilos y juzgando.

En definitiva, quienes abrazamos la carrera política lo hacemos porque hay una realidad que nos duele de una u otra manera. Podemos coincidir qué es lo que nos duele, pero nos duele y queremos modificarla. En función de eso nos comprometemos y esa no es razón de vergüenza, es una razón de orgullo. Me parece que votando este proyecto de ley no es que el pueblo nos va a aplaudir ni cosa por el estilo, simplemente estamos cumpliendo con nuestro deber. No es para rasgarse tampoco las vestiduras. Había un decreto de hace muchísimo tiempo que habla del acceso a la información pública. Para finalizar, simplemente adhiero a las expresiones del senador Pais y estoy de acuerdo en aprobar en general el proyecto con las tres modificaciones a las que ya han hecho alusión, y reivindicando a la política. Muchas gracias.

**Sra. Presidente.-** Gracias, senadora Fiore.

Tiene la palabra la senadora Varela.

**Sra. Varela.-** Señora presidente: voy a ser más que breve, solo quiero adelantar mi voto positivo y comentar que este año, cuando fui a la reunión de la Comisión de Educación del Parlatino, el tema central fue justamente este: una ley marco de acceso a la

información pública. Realmente espero que formemos parte de esa lista de países que eligieron la transparencia.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es el distrito al que represento, tiene una ley de acceso a la información pública desde el año 1998. En 2007, cuando asumí como jefe de Gobierno el actual presidente, se puso en marcha un proceso de modernización, de gobierno abierto y de participación ciudadana, que permitió ponerse al día con los pedidos de información. ¿Qué quiero decir con esto? Además de la ley tiene que haber una voluntad política y un compromiso con la transparencia, y eso es lo que existe ahora.

A nivel nacional, contamos actualmente con un decreto, pero tener una ley integral actualizada es una deuda pendiente, un compromiso asumido por la República al adherir al Pacto de San José de Costa Rica. Hay varios puntos del proyecto de ley que implican un gran avance sobre la norma preexistente: los tres poderes del Estado están obligados a brindar información pública, la creación de la Agencia de Acceso a la Información Pública como ente autárquico, la representación federal gracias al establecimiento del Consejo.

**Sra. Presidente.-** Perdón, senadora. Senador Fuentes, permíname, pero estamos complicados...

**Sr. Fuentes.-** Perdón.

**Sra. Presidente.-** Gracias.

Continúe, senadora Varela.

**Sra. Varela.-** Gracias, señora presidente, la verdad que cuesta.

La representación federal, como decía, la integración de nuevos conceptos y formatos vinculados con los cambios tecnológicos y, en último lugar, la regulación de transparencia activa, que implica que el Estado tenga que publicar información de manera activa, aunque ningún ciudadano la solicite.

Para terminar, el acceso a la información pública es un derecho fundamental para nuestro sistema político, hace al fortalecimiento de la sociedad civil y el Estado, y es imprescindible para desarrollar una democracia legítima, transparente y eficiente. Estoy convencida de que la información es patrimonio de todos y que el derecho a saber es vital en la construcción y participación ciudadana. Por eso apoyo este proyecto de ley. Gracias.

**Sra. Presidente.-** Muchas gracias, senadora Varela.

Tiene la palabra el senador Pedro Braillard Pocard.

**Sr. Braillard Pocard.-** Señora presidente: muy brevemente, después voy a pedir autorización para insertar, solamente quiero expresar que tenía que hacer uso de la palabra porque el proyecto de ley que vamos a votar es demasiado trascendente. Con este instrumento legal vamos a estar a la altura de las democracias más consolidadas del mundo. Ya los pioneros de la ciencia política, como Robert Dahl cuando desarrolló el concepto de poliarquía...

**Sra. Presidente.-** Perdón, senadora Elías de Perez y senador Naidenoff, necesito silencio. Gracias.

**Sr. Braillard Pocard.-** Decía que cuando Robert Dahl desarrolló el concepto de poliarquía estableció como uno de los componentes fundamentales el acceso a la información. Esto contribuye fundamentalmente a consolidar posiblemente el desafío mayor o el tema más delicado que tenemos quienes estamos en política, que es la búsqueda de la legitimidad. Nadie cuestiona nuestra legalidad, el problema es con nuestra legitimidad y la tenemos que construir todos los días. Repito: la tenemos que construir todos los días. Entonces, uno de los componentes fundamentales es que

nuestros conciudadanos sepan que tienen toda la información que requieran de sus gobernantes, de todos los poderes del Estado, a su disposición y a su alcance.

Sinceramente, debo decir que he escuchado muchas opiniones muy valiosas de expertos –felicitó realmente el trabajo de las comisiones–, pero debo decir también que –modestamente– con los años que tengo de estudio de la ciencia política he sacado mi propia impresión de este proyecto de ley y creo que es una norma positiva. Escuché atentamente, como lo hago siempre, a todos mis colegas legisladores, a todos los senadores y senadoras, y no voy a emitir ningún juicio de valor sobre lo que aquí se ha expresado porque no me corresponde. Sí me voy a referir a un solo tema, que es esta limitación a quien ejerza el cargo de director, por haber pertenecido o ser autoridad de un partido político por un plazo determinado. Hace 40 años que milito en política, soy presidente de un partido, respeto y amo la institución del partido político y creo que uno de los grandes avances de la reforma de 1994 fue haberle dado al partido político jerarquía constitucional. Siempre les decía a mis alumnos que cuando estaba en la secundaria había un gobierno de facto y no podíamos estudiar la Constitución y no hacíamos mención a los partidos que estaban eliminados, o que estaban clausurados, porque no estaba en la Constitución el partido político.

La reforma de 1994 hizo un avance fundamental en ese aspecto: lo jerarquizó y le dio, como decíamos, esta presencia en nuestra Carta Magna que era fundamental. Pero en este caso, sinceramente, y parto de un principio de absoluta buena fe, no creo de ninguna manera que lo que se busque sea menospreciar la institución del partido político. Lo que se busca es justamente que el destinatario de esta ley, que es el sujeto activo en el acceso a la información, que es el ciudadano, tenga la absoluta seguridad de que quien va a ejercer tan delicada responsabilidad está desprovisto de preferencias políticas. Eso es a lo que creo que apunta esto, sinceramente. No me gusta cuando se dice algo de un partido. Reitero, soy presidente de un partido político, toda mi vida he trabajado y no he hecho otra cosa, o por lo menos supedité toda mi vida a lo que es trabajar en política. Reitero, parto de un principio de buena fe y es el único tema que voy a responder sobre lo que aquí se ha dicho.

Simplemente quiero respaldar esta ley. Vamos a dar un paso fundamental. ¿Es perfectible? Por supuesto, ¿qué ley no lo es? Pero a partir de que tengamos la ley podremos dejarla andar y hacer todas las correcciones que puedan resultar necesarias.

Con este concepto –adelanto que solicito autorización para realizar una inserción–, dejo sentado mi respaldo a este proyecto.

**Sra. Presidente.-** Tiene la palabra el senador Linares.

**Sr. Linares.-** Desde el punto de vista técnico se han hecho aportes importantes a este proyecto de ley. Se ha dicho mucho. Quisiera destacar dos o tres aspectos.

En primer lugar, adelanto mi apoyo en general al proyecto de ley, el rechazo a un par de incisos que voy a mencionar y, obviamente, al artículo 23, que me parece una falta de respeto al sistema político, como señaló el senador preopinante.

Resulta indudable que este tipo de ley necesita un complemento que técnicamente es posible: esto es, el gobierno abierto, que va a contribuir también a complementar el derecho humano que uno tiene –como se afirmó acá– después del Tratado de Lima, con los principios que allí se plantean para este tipo de normativa.

Es muy importante realizar algunas aclaraciones vinculadas a determinados artículos. Ya me referí al artículo 23.

Advierto una contradicción en algunos agregados en el inciso *m*) del artículo 8° que se hicieron *in voce* en la Cámara, después del tratamiento en comisión, por parte de un miembro vinculado al oficialismo.

Por otro lado, alguien del oficialismo, como el caso de Adrián Pérez, sugirió sacar el último párrafo del artículo 23.

Pareciera una contradicción el hecho de que, por un lado, haya apoyo a algunas situaciones de excepciones especiales y, por el otro, necesidad de corrección.

El senador Solanas adelantó lo relativo a la excepción en el inciso *m*), que rechazamos de plano. En primer lugar, porque venimos acompañando al exsenador Giustiniani en un reclamo: que resulta absolutamente imprescindible que se dé información definitiva del contrato de YPF en función de lo que la Corte ha ordenado. Lo cierto es que no se puede cumplir. Obviamente, eran condiciones del otro gobierno. No entendemos por qué este gobierno de alguna manera sigue reticente a obligar a los representantes del Ejecutivo a dar esa información. Sospechamos –lo dijo el senador Solanas– que hay compromisos difíciles de explicar para una empresa que teóricamente tiene mayoría del Estado, pero que, a su vez, porque cotiza en Bolsa en Nueva York, puede tener información restringida para nosotros, que somos los representantes del pueblo y hemos votado que esta empresa vuelva a ser parte del patrimonio nacional.

Otro tema que hemos planteado porque nos parece insuficiente es el de la modificación que se hizo al tratamiento de los datos personales. Se ha sacado lo relativo a “sensibles”. Debemos recalcar que Adrián Pérez, miembro del Ejecutivo, plantea que es mejor la redacción referida a datos sensibles, de manera que no entendemos esta dicotomía de opiniones del Ejecutivo. No sé por qué sorprende que tengamos aquí, en el Senado, opiniones divergentes con alguna parte del dictamen.

El otro punto –el senador Solanas seguramente hará alguna aclaración al respecto– es el organismo de aplicación. Creemos que no tiene la mejor redacción con relación a las condiciones que le han puesto a esta comisión. Consideramos que tiene que ser un organismo autárquico que tenga todas las condiciones para poder funcionar de forma independiente del Ejecutivo, a efectos de que no sea un organismo meramente vinculado al Ejecutivo que, precisamente, reciba las influencias del Ejecutivo.

**Sr. Solanas.-** ¿Me permite una interrupción?

**Sra. Presidente.-** El senador Pino Solanas le pide una interrupción.

**Sr. Linares.-** Sí, adelante.

**Sra. Presidente.-** Para una interrupción, tiene la palabra el senador Solanas.

**Sr. Solanas.-** Agrego algo que no expuse cuando hablé. Este órgano de control debe ser lo más amplio posible. Debe tener realmente autonomía o autarquía, y debe representar a las distintas corrientes de opinión.

Estamos garantizando el derecho a la información de todos los ciudadanos, no de los ciudadanos de una corriente o de otra, o de las dos fuerzas mayoritarias. Hay que pensar para el conjunto de la sociedad. Es decir, pensamos en una comisión plural importante. Una alternativa podría ser una comisión integrada por miembros del Congreso donde estén representadas todas las fuerzas, pero tampoco se resume toda la comunidad en la representación parlamentaria. Por eso, en muchos países del mundo se han integrado comisiones de control con referentes públicos incuestionables de los campos de la cultura, información, periodismo, etcétera.

Este punto es muy delicado. Forma parte de uno de las palancas decisivas de la buena o completa ejecución de una ley que intenta garantizar el acceso a la información pública.

Gracias.

**Sra. Presidente.-** Continúa en el uso de la palabra el senador Linares.

**Sr. Linares.-** Está claro que se trata de un derecho humano imprescindible. Esta ley viene a resolver una mora que tiene la Argentina en este aspecto. El decreto 1.172/03 la

cubrió en parte. La información tenía que estar desde uno de los órganos. Ahora van a ser todos los órganos de gobierno. Es un avance.

También hay que aclarar que esta ley por sí sola no resuelve todo el tema de la transparencia ni mucho menos. A este efecto, puedo mencionar algún hecho personal. En el año 2000, dieciséis años atrás, firmamos en la Municipalidad de Bahía Blanca un convenio con la Fundación Mariano Moreno que nos proveyó de un *software* que permitió hacer una página en la que pusimos todos los datos de compras de la municipalidad, licitaciones, el sueldo del intendente, etcétera. Después de muchos años, nadie pudo bajar esta página. Hay información importante disponible para cualquier ciudadano de Bahía Blanca a efectos de su control. Esto no ha evitado que haya habido intendentes que fueron denunciados por otros problemas.

Me parece que este tipo de ley es una herramienta importante. Si se garantiza el acceso a la información, se garantiza la participación en los controles y una democracia más fuerte.

Es una ley que puede ser perfectible. Después de tanto tiempo es importante al menos tener esta ley, más allá de algunos puntos que hemos planteado.

Reiteramos que votaremos en general a favor y en contra el artículo 23, el inciso *m*), vinculado al tema del acceso a la información de empresas que coticen en Bolsa y la excepción de datos personales, dado que tendría que haberse respetado al menos la sugerencia de un miembro del Poder Ejecutivo que vino al Senado y que mandó una información.

**Sra. Presidente.-** Tiene la palabra la senadora Mirkin.

**Sr. Fuentes.-** Perdón, una aclaración.

**Sra. Presidente.-** Sí, otra vez.

**Sr. Fuentes.-** ¡Muy aclarativo estoy!

**Sra. Presidente.-** Muy aclarador. (*Risas*)

**Sr. Fuentes.-** Al senador Linares: las dos observaciones que el secretario de Reforma Política efectuara fueron incorporadas inmediatamente al dictamen en minoría. Las observaciones que hizo están en ese dictamen en minoría, lo cual no significa que en el acuerdo que surja esté incluida, pero fueron inmediatamente consideradas: lo de datos personales y eliminar el otro tema mencionado.

**Sra. Presidente.-** Ahora sí, tiene la palabra la senadora Mirkin.

**Sra. Mirkin.-** Gracias, señora presidenta.

Voy a ser muy breve.

En primer lugar, quiero transmitir que comparto los planteos que han hecho los senadores que establecieron un dictamen en minoría originariamente. De hecho, en el debate pareciera –por lo menos por ahora– que habría mayoría en defender esos criterios que han sido planteados.

Yo no he sido parte de la comisión, pero leyendo y estudiando el proyecto me llaman la atención algunas cuestiones.

En primer lugar, no creo nunca que una ley –que es una herramienta para el ejercicio de la actividad pública o privada– sea la solución a los males como, por ejemplo, al tema de la transparencia de la función pública. No lo creo aun habiendo sido funcionaria del Ejecutivo provincial ni lo creo siendo legisladora. Justamente, considero que esto lo que hace es permitir –no garantizar–, facilitar –no obligar– que se puedan poner otros mecanismos y otras herramientas a disposición de los ciudadanos.

En primer lugar, en el artículo 6° plantea la gratuidad y, cuando uno lee, dice así: “El acceso a la información pública es gratuito en tanto no se requiera su reproducción”. Si se requiere su reproducción ya no es gratuito. Entonces, ¿es gratuito o no es gratuito?

Me hago esta pregunta porque los costos de reproducción corren por cuenta del solicitante y, si no dispone para los costos, no tendrá la información.

En segundo lugar, la cantidad de excepciones...

**Sr. Fuentes.-** ¿Me permite una aclaración?

**Sra. Presidente.-** El senador Fuentes pide la palabra para una aclaración.

**Sra. Mirkin.-** Sí, presidenta.

**Sra. Presidente.-** Para una aclaración, tiene la palabra el senador Fuentes.

**Sr. Fuentes.-** Conscientes de esa observación que usted hace, repito, en el dictamen de modificaciones de la media sanción, a continuación, en cuanto al artículo 6° –de la gratuidad–, aclaramos en este dictamen que en ningún caso el valor puede exceder los costos reales de reproducción y de la entrega de la información. Podrá establecerse una reducción de dichos costos cuando la solicitud haya sido realizada por instituciones educativas, científicas y sin fines de lucro, vinculadas con actividades de interés público, o particulares que acrediten que carecen de medios para afrontarlos, conforme lo establezca la reglamentación. En ningún caso el costo de la reproducción puede poner en riesgo el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

**Sra. Presidente.-** ¡Un libro leyó! ¡Como la enciclopedia de Espasa-Calpe! (*Risas.*)

**Sra. Mirkin.-** Hay una expresión que dice: entró con un refrán y salió con un diccionario. Así me ha ido, porque yo he leído dos renglones y usted me ha leído diez.

**Sra. Presidente.-** Gracias, senador Fuentes.

Adelante, senadora Mirkin.

**Sra. Mirkin.-** En el capítulo 8, sobre el que ya obviamente han hablado –de las excepciones–, es tan grande la cantidad de excepciones que está planteada que en realidad no da lugar a la transparencia.

No soy una experta ni mucho menos en los temas que están planteando acá, pero, si en el ejercicio de la función pública me hubiera tocado plantear cómo ayudar o hacer más factible que los ciudadanos puedan tener acceso a la información, no habría planteado tantas excepciones, porque justamente esas excepciones son trampas para que no se acceda a la información según mi punto de vista.

En tercer lugar, en un tema que ya ha sido abundantemente planteado, me parece que este instituto o este organismo que se crearía tendría que estar por fuera del Poder Ejecutivo.

Por el otro lado, me parece que tenemos que pensar seriamente que en la actividad política somos justamente los políticos los que tenemos que ensalzarla: los que tenemos que hacer de la actividad política, todos los días, una demostración de luchar por el interés común.

Justamente, el Estado no somos nosotros. El Estado somos todos y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es trabajar para que todos puedan acceder a los derechos ciudadanos.

Resulta que en el tema de quiénes pueden acceder a los cargos de este instituto dice: “Deberá ser ciudadano argentino”, y después dice que los ciudadanos argentinos que ejercen cargos no lo pueden hacer. Entonces, somos ciudadanos argentinos o no sé qué somos. ¡Somos extraterrestres!

De hecho, justamente creo que la ley de los partidos políticos, la ley de la participación ciudadana, lo que hace que las cuestiones políticas o las cuestiones del ejercicio de la función pública puedan ser de conocimiento público, es lo que enaltece la actividad política. Entonces, así nos digan –como dijeron algunos de los que hoy hablaron– cosas horribles de lo que somos, quienes estamos convencidos de lo que estamos haciendo somos los que tenemos que defender que sin esta actividad no hay

ninguna posibilidad de tener una sociedad democrática. Ya conocemos, en las sociedades que no fueron democráticas, cómo nos fue.

**Sra. Presidente.-** Gracias, senadora.

Tiene la palabra la senadora Elías de Perez.

**Sra. Elías de Perez.-** Gracias, señora presidente.

Doce países integran Sudamérica y solamente tres no tienen ley de acceso a la información pública. Lamentablemente, en ese pequeño grupito está nuestro país junto a Venezuela y a Bolivia.

La verdad, es triste que hoy, a esta altura del debate, no podamos estar contentos sabiendo que el Senado de la Nación pueda regalar al país algo que hace rato se lo debemos, señora presidente, y que hoy podamos empezar entre todos a contar con una vergüenza menos y con una libertad más, como decía el manifiesto de la reforma universitaria.

Digo esto porque no estamos hablando de cualquier cosa. Todos han ensalzado la importancia de la ley de acceso a la información pública, pero, cuando yo veo la envergadura de los cambios que se piden para que vuelva la ley a Diputados, recuerdo – y no puedo dejar de mencionarlo– cuando en 2004 también una ley de acceso a la información pública había tenido media sanción en Diputados y había venido a esta Honorable Cámara. Quien estaba en ese momento frente a la Comisión de Asuntos Constitucionales era la senadora Cristina Fernández de Kirchner. Ella, con algunos argumentos similares a los que hoy se plantean, también propuso algunos pequeños cambios teóricamente para enriquecer el proyecto de ley, que volvió a Diputados, y hasta el día de hoy sigue nuestro país sin ley de acceso a la información pública.

Nosotros, cuando yo decía que podemos comenzar a contar con una vergüenza menos y con una libertad más, es porque cada ciudadano puede acceder a una libertad más cuando puede acceder a la información verdadera. Puede opinar, puede expresarse, puede entonces sacar su libre opinión, pero, además, señora presidente, porque a veces cuando hablamos de acceso a la información pública solo y exclusivamente pensamos en la posibilidad de ejercer el derecho de controlar a quienes nos administran, a quienes nos gobiernan, a quienes nos representan, pero es muchísimo más que eso.

En una charla que daba la diputada Karina Banfi –una diputada de nuestro espacio, especialista en este tema–, escuché que ella ponía el ejemplo de una señora que necesitaba una silla de ruedas del PAMI y a la que no se la daban. Con esta ley podría tener acceso inmediato a que le respondan por qué, en cuánto tiempo, pero, además, a través de la segunda parte de la ley, de gobierno abierto y demás, podría también acceder y ver qué cantidad es la que se va dando en el año. También, podría ver cuántas son las que faltan para dar, qué es lo que está definido en este tema. En definitiva, tener toda la información para acceder lo más rápidamente posible a un derecho que tiene este ciudadano.

La verdad, es voluntad del gobierno del que tengo el honor de formar parte tener una ley de acceso a la información pública. De hecho, estamos convencidos de que es necesario gobernar con las luces prendidas, de cara al ciudadano, con la verdad; que cada uno de los argentinos pueda preguntarnos y saber qué es lo que se hace con las cosas que nos confían a cada uno de nosotros.

En este sentido, señora presidente, déjeme que alabe la administración de esta casa. ¡Tantas veces escuchamos que nos muestran o nos critican porque tenemos andamios, sin ver que lo que queremos es que realmente tengamos un palacio que pueda volver a ser la maravilla que es en todo su esplendor! Nos critican porque, de pronto, hay algún giro que no les gusta, cuando esto viene pasando todos los años. Nos critican

por el micrófono o por lo que fuere, pero, en este caso de acceso a la información pública, quiero reconocer a la administración del Senado –que ha recibido un premio internacional por las cosas que ya se han hecho– por el acceso a la información que ya está teniendo esta Honorable Cámara. Ahora está dando los pasos para lo que sigue. Y la parte más importante es la ley que hoy, lamentablemente, veo que se nos está yendo de las manos la posibilidad de sancionar para dársela a nuestro país.

Llamo a reflexión a todos los senadores porque sé que muchos de los que hoy han expuesto realmente tienen un compromiso con la transparencia. De hecho, es indispensable, necesario, que demos este paso de calidad.

Cuando hablamos de gobierno abierto, señora presidente, es mucho más que el hecho de que alguien tenga que pedir información a un poder o a otro, es que con un solo clic un ciudadano pueda saber qué se hace con las cosas que se administran y que son de cada uno de los argentinos. Significa que el propio gobierno, en una página, va mostrando todo lo que va haciendo. Se puede seguir así una licitación de obra para que no pasen las cosas que han sucedido, pero estas cosas lamentablemente han hecho que en la Argentina el secretismo haya gobernado por muchos años. ¡Y en muchas de nuestras provincias esto sigue existiendo todavía hoy!

Voy a poner solamente un ejemplo. El 29 de octubre del año pasado, cuando asumía el gobernador de mi provincia, nombraba como asesor con rango de ministro a quien hoy es senador por Tucumán y había sido gobernador hasta pocos días antes. Lo hace *ad honorem* y pone que los gastos en que él incurría iban a ser a cargo de la provincia. ¡Eso es lo de menos! Me refiero a que se ha conocido la existencia de ese decreto porque el diario de mayor tirada de mi provincia lo ha sacado el domingo. Entonces, ayer recién, después de 313 días, ha sido puesto en el Boletín Oficial. Estas cosas son las que no queremos que pasen. El propio gobierno de la provincia ha dicho que, una vez que se sancionen estas leyes, iban a seguir el mismo camino. ¡No tengo dudas de que cuando las distintas provincias tengan que venir al Consejo Federal de Transparencia a comparecer e ir rindiendo cuentas adelante de todas las demás respecto de cuáles son los pasos que han ido dando con relación a la transparencia, estas cosas que han pasado en Tucumán no volverán a suceder! Porque la pregunta no es si han gastado o no, o si los gastos de este asesor han sido pagados por Tucumán o no. El objetivo es que se conozcan de cara a la gente, porque los que pagan son los tucumanos y nada más.

Estas cosas son las que queremos que cambien. Queremos que haya una Argentina con la luz prendida, una Argentina de la verdad, una Argentina de acceso a la información pública, porque estamos convencidos de que ese es un requisito indispensable para que exista una sociedad democrática. Por eso me llama la atención, ya que todos los que estamos sentados acá somos conscientes de la importancia de los partidos políticos. Todos los que estamos acá somos políticos y por supuesto que los defendemos. Ahora, que se haya tomado en la otra Cámara el cuidado de poner que sean personas de probada experiencia e idoneidad en la materia –¡en la materia!–, tratar de despolitizarlo, creo que ha sido lo único que ha querido Diputados y no dar una bofetada a nadie.

Independientemente de esto...

**Sra. Mirkin.-** ¡Pido la palabra!

**Sra. Presidente.-** Senadora: le pide una interrupción la senadora Mirkin.

**Sra. Mirkin.-** ¡No! Pido la palabra para plantear una cuestión de privilegio cuando termine de hablar la senadora, señora presidente.

**Sra. Presidente.-** Está bien.



Continúa en uso de la palabra la senadora Elías de Perez.

**Sra. Elías de Perez.-** Se ha despolitizado –decía– en la ley este cargo tan importante y demás.

Esta pequeña modificación hasta podría haber sido propuesta como otra ley, como se había tratado o hablado en la comisión correspondiente. Entonces, que hoy en día se dé marcha atrás en el tema es una tristeza.

Llamo a la reflexión a los distintos senadores y senadoras de la oposición. La Argentina merece una ley de acceso a la información. Por eso es que nosotros vamos a votar el proyecto tal cual ha venido de la Cámara de Diputados, señora presidente, ya que tenemos un compromiso con la transparencia y creemos que Argentina no puede esperar más; gracias, presidente.

## **15. Cuestión de privilegio (S.-3.475/16.)**

**Sra. Presidente.-** Tiene la palabra la senadora Mirkin.

**Sra. Mirkin.-** Gracias, presidenta

La verdad es que cada vez que habla la senadora preopinante se refiere al resto de los políticos tucumanos como si fuéramos todos delincuentes y nos negáramos a la información pública. No solamente se refiere así en el tema que ha planteado del senador Alperovich, sino que, además, se refiere al tema de la obra pública no solamente de la provincia de Tucumán, sino de seis provincias argentinas.

De hecho, tiene una gran liviandad para plantear cuestiones que son de enorme preocupación para todos los argentinos. Por ejemplo, decir en reiteradas oportunidades que este gobierno y este presidente son los que quieren la verdad, y la verdad –la mía– es que, si hay algo que no se verifica en estos meses de gestión de este presidente, o de este proyecto político, es que se quiera la verdad.

Entonces, quiero dejar aclarado que cada vez que se hable en los términos en que se habla, tan livianamente sobre mi provincia y sobre quienes ejercimos los cargos públicos, vamos a tener que actuar planteando las cosas en otros términos. Si no, queda en la opinión de los senadores y en los de la prensa, que no son ningunos despolitizados, que hacen política más que nosotros... ¡Yo lo que creo que hay que hacer es politizar! Es decir, entender qué nos ocurre para encontrar la solución; muchísimas gracias, señora presidenta.

**Sra. Presidente.-** La pasamos a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

## **16. Derecho de acceso a la información pública (O.D. N° 604/16.) (Continuación.)**

**Sra. Presidente.-** Tiene la palabra el senador Romero.

**Sr. Romero.-** Señora presidenta: realmente, el tema del acceso a la información y de conocer los actos de gobierno están ligados en la historia del hombre a la libertad, a la falta de libertad y a la lucha por la libertad.

En la Edad Media, para no ir más atrás, la verdad estaba en los conventos, en los monasterios, cuidada bajo llave. Cuando se inventó la imprenta la gente tuvo el acceso y la libertad al conocimiento en la medida que podía acceder a los libros. Y hoy, saltando a la organización de los Estados, se puso en la publicación de los decretos y de las leyes como requisito de su vigencia. Esto no por una razón estética de juntarlas, sino para que nadie sea sorprendido con actos de gobierno que solamente conociera aquel que los emitió. O sea que, superada toda esta etapa hoy con la informática que existe en el mundo donde uno puede encontrar de todo en la web, lo que estamos pidiendo acá es

que esté la información disponible.

No estamos hablando de la información transparente. No queremos que solo se publiquen las cosas buenas, sino que todo esté puesto y que uno pueda acceder. De esta manera sería una ventaja para el ciudadano, cumpliríamos con la Constitución, reforzaríamos derechos y nos pondríamos a la altura de otros países modernos, pero hay que vencer esa cultura medieval de que lo que se hace es secreto. Eso es lo que este proyecto de por sí no corrige. Esta iniciativa permite mecanismos y acciones para ir en la búsqueda de ese fin deseado, pero jamás conseguido, de contar con toda la información posible.

Si bien reconozco que el decreto fue un avance, también sé lo difícil que fue el funcionamiento. ¡Porque hay que vencer esa práctica que en la Argentina se ejerció también en la época de los militares respecto del secreto y de la reticencia de cualquier burócrata a que se conozca lo que se hace! Prueba de ello es un ejemplo tonto que puedo contar: el año pasado pedí a la Cancillería por escrito una información y me dijeron que, como no estaba fundada, no me la podían dar. La gente mía dejó morir el caso, pero, ¿qué hay que hacer? ¿Ir a la Justicia? ¡Bueno, tendríamos una oficina también para protestar!

¡Ni hablar del caso en que la Justicia determinó lo del contrato de YPF y todavía no lo podemos conocer!

No queremos que esta ley, por algún apuro que no existe, siga el concepto de que son más las excepciones que la regla, y aquí hay tres excepciones. Entonces, los burócratas van a buscar colarse en esas tres excepciones para no brindar la información que nosotros necesitamos.

¡Por supuesto que no siempre la información es grata! Hubo un caso casi gracioso en México, cuando quisieron dar el ejemplo en un momento sobre la transparencia desde la Casa de Gobierno, se publicó que el Palacio Los Pinos había comprado toneladas de papel higiénico. Entonces, la prensa se mofó de ellos un tiempo largo, hasta que aclararon que compraron por Presidencia, pero era para diez edificios o cosas parecidas. O sea, no siempre es grato porque nadie va a buscar la información para felicitar a alguien, pero es una obligación darla, es un derecho tenerla y, también, cuestionar los actos de gobierno no solo por la transparencia sino por cualquier cuestión que uno quiera criticar.

Yo creo que es un camino en el cual vamos transitando. La agencia podrá perfeccionarse y tener más rigor. Por supuesto, no coincido con que ese cargo esté excluido para los políticos como si ya admitiéramos de entrada la poca neutralidad de un político, o su parcialidad. Es decir, se trata de un absurdo reflejarlo en una ley. Después, que el gobierno o a quién le toque elija al más neutral. Pero a mí, como político, me parece que lo más neutral no es lo más político, generalmente.

Así que en este tema vamos a acompañar desde el interbloque este proyecto en general y en particular, si se logran las modificaciones propuestas, que no son caprichosas, como la del último párrafo del artículo 23 y la del inciso *m*) del artículo 8°. Creemos que son elementos para perfeccionar esta norma.

No nos debemos preocupar por si este proyecto vuelve a la Cámara de Diputados, porque tampoco nos debemos dejar presionar por las sanciones de esa Cámara. Por el contrario, tenemos que ejercer nuestro derecho a que esta Cámara no sea una escribanía, como tantas veces dijimos, y ser capaces de corregir desde la buena fe esta norma creyendo que estamos haciendo un aporte. En todo caso, sabremos instar a la Cámara de Diputados para que vuelva pronto aquí, si es que esto vuelve para esa Cámara; muchas gracias.

**Sra. Presidente.-** Muchas gracias, senador.

¿El senador Pichetto está en el recinto? Porque ya estamos para los cierres del debate. Sólo faltan exponer los senadores Pichetto y Rozas; nada más.

Así que vamos a esperar unos segundos, haciendo un cuarto intermedio en las bancas...

Perdón, se encuentra presente el senador Rozas. Así que le voy a conceder el uso de la palabra.

Pido a los senadores que se vayan identificando porque hay once sin identificar.

**Sr. Rozas.-** Señora presidenta, señores senadores: indudablemente, con la ley de acceso a la información pública estamos frente a un derecho humano fundamental que, además, constituye un instituto que no tengo dudas de que sirve para la consolidación democrática de los países.

Evidentemente, estos principios están consagrados en el artículo 1º de nuestra Constitución Nacional cuando consagra el sistema republicano, y no solamente se consagra el acceso a la información pública, que es un derecho político fundamental, sino que lógicamente esos principios se refieren también a otros derechos: económicos, sociales y culturales. Pero evidentemente la democracia no puede solamente resguardarse en el hecho formal de votar. Por supuesto que no es un elemento que esté en discusión: me refiero a lo que significa elegir y ser elegido en cualquier democracia del mundo, pero, fundamentalmente, hay que consagrar también otros derechos. El acceso a la información pública constituye uno de los derechos fundamentales porque implica el derecho a peticionar y a expresarse.

Quiero decir que reconozco que todo senador tiene derecho a tener una mirada diferente y que, a veces, hasta está muy bien que así sea, pero resalto que estas iniciativas sobre el acceso a la información pública ya tuvieron estado parlamentario a partir de 2004; estado que perdieron después, en 2006. Después, en 2010 creo que hubo un proyecto de los senadores Marino y Sanz que se aprobó. Posteriormente, en la Cámara de Diputados después también perdió estado parlamentario. Por lo tanto, la verdad es que no quisiéramos volver a repetir esta historia.

Esto no significa que los senadores no tengan buena fe al poner reparos respecto de algunos artículos de esta norma. Pero, con toda sinceridad, me parece que hoy podríamos estar reparando una deuda histórica que tiene la democracia argentina con la sociedad. Lo dijeron aquí varios senadores, pero es importante recalcarlo...

*- Murmullos en el recinto.*

**Sra. Presidente.-** Por favor, señores senadores: pido que guarden silencio porque está hablando el senador Rozas.

**Sr. Rozas.-** ¡Está bien, sigan nomás conversando! (*Risas.*)

Decía que, si bien es cierto que ya varios senadores lo han resaltado, es importante volver a decir que Ecuador, Bolivia, Venezuela y Argentina son los únicos países donde no se ha podido consagrar este derecho. Y, si bien es cierto que el decreto de 2003 del presidente Kirchner fue una avanzada, de todas maneras terminó siendo a todas luces insuficiente. Por eso hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia en 2012, que podríamos catalogar como histórico. Me refiero al famoso caso del PAMI, que no quiso brindar información sobre los gastos publicitarios. En ese caso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que, en rigor de verdad, no estábamos dando cumplimiento a los tratados internacionales porque se debía dar información; se debía consagrar el principio de máxima divulgación, principio universal o consagrado en los tratados internacionales. Ello no estaba solamente referido a los órganos propios del Poder

Ejecutivo sino a todo lo que signifique dicho poder: entre ello, órganos como el PAMI, la ANSES y otros tantos organismos.

Consagró la Corte Suprema este principio, que yo creo, en cierta medida, que es lo que estamos recogiendo hoy en esta ley. Ha venido esta ley votada casi por unanimidad de la Cámara de Diputados de la Nación. Todos sabemos cuál es la composición política actual de la Cámara de Diputados. No hay una mayoría del gobierno. Realmente, varias fuerzas políticas tienen una representación genuina. Sin embargo, ha habido una coincidencia casi unánime, creo, fundamentalmente por la necesidad que tenemos de consagrar este derecho fundamental para el pueblo argentino.

Repito: creo, con toda sinceridad, sin el ánimo de dejar de reconocer que cada senador tiene lógicamente la libertad de expresarse como así lo desee, que estamos cometiendo un error. Y la verdad es que, si fuésemos opositores, haríamos un análisis diferente. Pero nosotros somos el oficialismo y nosotros somos los que queremos realmente, como decía la senadora Silvia Pérez, que el gobierno o el Estado –porque en realidad no es el gobierno, sino los tres poderes del Estado con todos los entes descentralizados o en los que el Estado tenga participación– le pueda dar información acabada a cualquier persona. Tiene legitimidad activa cualquier persona que quiera cualquier dato del gobierno.

Entonces, la verdad es que no se entiende o, por lo menos, nosotros no entendemos –quienes no nos acompañan, por supuesto, tienen una posición respetable, honorable– cómo no acompañan esta decisión del oficialismo, del gobierno nacional, de pretender hacer una apertura de los tres órganos del Estado nacional –Poder Judicial, Poder Legislativo o el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo con todas sus reparticiones– para que la sociedad argentina pueda acceder a cualquier tipo de información, salvo las excepciones previstas, que tienen que ver, incluso, con lo que dijo la Corte en el año 2012, que eran respecto de tres temas: uno relacionado con la intimidad o identidad de las personas, las relaciones diplomáticas y la seguridad nacional. Más o menos esos son los tres conceptos que se trató de fijar como excepciones en la ley del acceso que vino en revisión de la Cámara de Diputados de la Nación.

Quisiera terminar diciendo que hago más las expresiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando dijo que el tema del acceso a la información no es un derecho del Estado o de los gobiernos, es un patrimonio común del pueblo argentino. Creo que ese es el sentido fundamental de esta ley: no es un derecho del gobierno o del Estado, sino de cada uno de nosotros. Y si no tuviéramos la posibilidad de que finalmente lo que se ha decidido por mayoría en comisión –nuestra posición– obtenga los votos necesarios, ruego a Dios que pronto la Cámara de Diputados sancione esta ley para que dentro de unos años no nos volvamos a encontrar con la sorpresa de que ya pasaron tantos años y los ciudadanos no tienen acceso a la información pública.

**Sra. Presidente.-** Vamos a votar en general. Faltan identificarse seis senadores o senadoras.

Mientras tanto, podemos aprobar las inserciones.

- *Se practica la votación a mano alzada.*

**Sra. Presidente.-** Aprobadas las inserciones.<sup>14</sup>

Me faltan identificar tres senadores o senadoras... Listo, están todos identificados.

<sup>14</sup> Ver el Apéndice.

Vamos a votar, entonces, la ley en general.

- *Se practica la votación por medios electrónicos.*

**Sr. Secretario (Tunessi).**- Resultan afirmativos 58 votos; negativos, un voto; abstenciones, cero votos.

- *El resultado de la votación surge del acta correspondiente.*<sup>15</sup>

**Sr. Secretario (Tunessi).**- Se registra como positivo el voto de la senadora Pilatti Vergara.

**Sra. Presidente.**- Se registra como positivo. Por unanimidad, entonces.

¡Qué pena que no podemos sacarla la ley...! Se me escapó. (*Risas.*)

Senador Pichetto.

**Sr. Pichetto.**- Quería hacer una propuesta. El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales va a hacer tres mociones en tres artículos. Si estos tres artículos se aceptan, votaríamos en bloque. Si no, los separamos del conjunto de la ley.

**Sra. Presidente.**- *Okay*

**Sr. Pichetto.**- Así que le doy la palabra al senador Fuentes para que diga cuáles son los artículos y cuál es el contenido de la reforma.

**Sra. Presidente.**- Perfecto, senador Pichetto.

Lo escucho, senador Fuentes.

**Sr. Fuentes.**- Las modificaciones son las siguientes. Se suprime el inciso *m)* del artículo 8º, de las excepciones. El inciso *m)* dice: “Información correspondiente a una sociedad anónima sujeta al régimen de oferta pública”.

Esa es la primera modificación. Entiendo que esta va a ser tratada por un lado y las otras dos creo que van a tener la adhesión de la mayoría. Una es en el artículo 20, en su redacción: “La Agencia de Acceso a la Información Pública estará a cargo de un director que durará 5 años en el cargo, con posibilidad de ser reelegido por única vez. El director será designado por el Poder Ejecutivo nacional... –acá se agrega– con acuerdo del Senado de la Nación –y continúa– mediante un procedimiento de selección público, abierto y transparente que garantice la idoneidad del candidato”.

Es decir, que el acuerdo del Senado se incorpora en el artículo 20.

**Sra. Presidente.**- Bien.

**Sr. Fuentes.**- Mantiene la facultad el Ejecutivo, pero con acuerdo del Senado.

En el artículo 23 se saca prácticamente esa *capitis diminutio* que es cuando dice: “El director propuesto no podrá haber desempeñado cargos electivos o partidarios en los últimos 5 años previos a la designación”.

Eso se elimina.

**Sra. Presidente.**- *Okay.*

**Sr. Fuentes.**- Yo propondría votar, entonces, el artículo 8º por un lado...

**Sra. Presidente.**- Yo diría que lo que podemos hacer es votar todos los otros artículos ahora, juntos. Y después votar el 8º, después el 20 y después el 23.

Senador Rozas.

**Sr. Rozas.**- Nosotros anticipamos nuestra posición. Nosotros vamos a votar el proyecto de ley en revisión tal como vino de la Cámara de Diputados de la Nación. Nosotros no vamos a acompañar ninguna de las propuestas a las que termina de hacer referencia el senador preopinante.

**Sra. Presidente.**- Perfecto. Entonces, con más razón.

Entonces, vamos a votar todos los artículos, menos el 8º, el 20 y el 23.

Así que vamos con el sistema para votar.

---

<sup>15</sup> Ver el Apéndice.

Se votan todos los artículos, menos el 8º, el 20 y el 23.

- *Se practica la votación por medios electrónicos.*

**Sr. Secretario (Tunessi).**- Resultan afirmativos 59 votos; negativos, cero; abstenciones, cero. Unanimidad.

- *El resultado de la votación surge del acta correspondiente.*<sup>16</sup>

**Sra. Presidente.**- Bien, unanimidad.

Y ahora vamos el artículo 8º.

**Sr. Pinedo.**- Pido la palabra.

**Sra. Presidente.**- ¿O los tres juntos? El 8º del proyecto, del mayoritario...

**Sr. Pichetto.**- Nosotros votamos negativamente.

**Sra. Presidente.**- Por eso, ustedes votan negativamente.

Vamos a votar como corresponde. Tenemos que votar el dictamen de mayoría, el artículo 8º del dictamen de mayoría.

**Sr. Pinedo.**- Pido la palabra.

**Sr. Pichetto.**- Si surge un resultado negativo, proponemos la alternativa. ¿Estamos de acuerdo?

**Sra. Presidente.**- Exacto.

Tiene la palabra el senador Pinedo.

**Sr. Pinedo.**- Hay una propuesta de la oposición de modificar el inciso *m*) del artículo 8º.

El inciso *m*) del artículo 8º lo que hace es eximir de la apertura de toda la información a las empresas que tengan participación estatal, que sean una sociedad anónima sujeta al régimen de oferta pública. Si eso se elimina como excepción, significa que las empresas con participación minoritaria del Estado tienen que abrir la información, dice, solo en lo referido a la participación estatal, frontera que no conozco. Pero les quiero informar qué es la información que tienen que abrir. Tienen que abrir: máximo acceso, la información debe publicarse en forma completa, con el mayor nivel de desagregación posible y por la mayor cantidad de medios disponibles, y tiene que estar accesible para todas las personas. Esto dice el artículo 1º.

O sea que, si cualquier señor que tiene una sociedad en la Argentina, el Estado argentino le compra una acción, entonces tiene que darle toda esta información a su competencia. En la parte que participe el Estado... que no sé qué es. A lo mejor, el Estado querrá tener opiniones, miradas políticas, etcétera. Lo que quiera el Estado, que nadie sabe qué es lo que va a querer el Estado y la discusión que se va a generar.

Como todo el mundo comprende, no sé quién va a venir a la Argentina en esas condiciones.

Ahora bien, pongámonos en la hipótesis de que sea mayoritaria la participación del Estado. Entonces, una empresa con participación mayoritaria del Estado, que tenga que competir en la Argentina y en el mundo, tiene que abrirles toda la información a sus enemigos. ¿Cómo hace para competir? ¿Qué queremos? ¿Matar a las empresas con participación estatal mayoritaria?

Este es el motivo. Me parece que es absolutamente inaceptable la propuesta de la oposición.

**Sra. Presidente.**- Tiene la palabra la señora senadora Crexell.

**Sra. Crexell.**- En el ámbito de aplicación, el artículo 7º dice: “Son sujetos obligados a brindar información pública: las empresas y sociedades del Estado que abarcan a las empresas del Estado, las sociedades del Estado, las sociedades anónimas con

---

<sup>16</sup> Ver el Apéndice.

participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado tenga participación mayoritaria”.

¿Por qué excluyen a las que cotizan en Bolsa, cuando además pueden hacer uso de las excepciones que están claramente también definidas en el artículo 8º? Por ejemplo, el inciso *e*) dice: “Información en poder de la Unidad de Información Financiera encargada del análisis, tratamiento y transmisión de información; información sensible...”.

Están absolutamente amparados en las excepciones del artículo 8º, otros incisos, los que tienen la participación en la Bolsa, los que pueden hacer oferta pública.

**Sra. Presidente.-** Senador Pais.

**Sr. Pais.-** Presidenta: quiero aclarar, en principio, que disentimos absolutamente con lo dicho por el senador Pinedo, por cuanto en modo alguno se pone en peligro algún tipo de inversión o la seguridad jurídica de las empresas, y no hay ningún elemento que pueda alterar disvaliosamente en lo económico a las empresas.

La eliminación del inciso *m*) es congruente con la redacción del artículo 7º. Dejar el inciso *m*) es desnaturalizar el artículo 7º. Borrar en la ley, en el artículo siguiente, lo que se ha puesto en el artículo anterior.

El artículo 8º presenta las excepciones al acceso a la información pública. Las excepciones que, por supuesto, conforme el espíritu de la ley, deben ser de carácter restrictivo.

El inciso *m*) no es de carácter restrictivo; es en general. Cualquier sociedad que cotice en Bolsa, el régimen de oferta pública, automáticamente no debe brindar ningún tipo de información. Ninguno, ni el más elemental.

Cuando se habla solamente por la participación estatal, si tiene una acción, lo que podrá preguntar el particular es a cuánto compró la acción, cuál es su valor y cuánto le significa la participación de ganancias de la acción. No puede preguntar nada más porque es lo que dice la ley. La ley dice: lo que hace a la tenencia del dinero público.

Vamos a hablar más claro. Las empresas que cotizan en Bolsa tienen la garantía, como bien dijo la senadora Crexell, del inciso *e*) y, fundamentalmente, del inciso *c*).

Fíjese cómo las protege el inciso *c*). Dice: “Secretos industriales, comerciales, financieros, científicos, técnicos o tecnológicos cuya relevancia pudiera perjudicar el nivel de competitividad o lesionar los intereses del sujeto obligado”. Lesionar los intereses del sujeto obligado es, justamente, todo lo contrario a lo que ha dicho el senador Pinedo. Acá está garantizado que no se van a lesionar los intereses de las empresas sobre las cuales se deba acceder a la información pública, pero en todo aquello que no lesiona los intereses de esa empresa, el particular, el ciudadano, el habitante de la Argentina puede verificar la información necesaria.

Eso es un principio general y esta es la garantía a la que queremos que accedan los habitantes de la República Argentina.

**Sra. Presidente.-** Entonces, vamos a votar el artículo 8º del dictamen de mayoría.

Los que están a favor de la posición que esbozaron los senadores Rozas y Pinedo tienen que votar verde y los que están en contra tienen que votar rojo. Para que se entienda bien. Me encanta ser maestra a mí. (*Risas.*)

**Sr. Mayans.-** Hay que aclarar el sentido del voto como usted lo hace.

**Sr. Fuentes.-** Es didáctico lo suyo.

**Sra. Presidente.-** Es que Mayans me lo pidió. ¿Qué quiere que le diga?

En consideración el artículo 8º del dictamen de mayoría.

- *Se practica la votación por medios electrónicos.*

**Sr. Secretario (Tunessi).**- Resultan afirmativos 15 votos; negativos, 44 votos; abstenciones, cero votos.

- *El resultado de la votación surge del acta correspondiente.*<sup>17</sup>

**Sr. Fuentes.**- Senadora...

**Sra. Presidente.**- Senadora no soy.

**Sr. Fuentes.**- Propongo que se vote como hemos dictaminado.

**Sra. Presidente.**- Ahora vamos a hacer eso.

Vamos a votar el artículo 8º del dictamen de minoría. Perdón, de la propuesta.

- *Se practica la votación por medios electrónicos.*

**Sr. Secretario (Tunessi).**- Resultan afirmativos 44 votos; negativos, 15 votos para la propuesta de reforma formulada en el artículo 8º.

- *El resultado de la votación surge del acta correspondiente.*<sup>18</sup>

**Sra. Presidente.**- Vamos a hacer lo mismo con el artículo 20.

¿Ya se hizo la propuesta de modificación?

**Sr. Fuentes.**- Así es.

**Sra. Negre de Alonso.**- Se pueden votar los dos juntos: 20 y 23.

**Sra. Presidente.**- Perfecto.

Procederemos a votar los artículos 20 y 23 juntos del dictamen de mayoría.

**Sr. Secretario (Tunessi).**- Se pone en consideración los artículos 20 y 23 del dictamen de mayoría.

- *Se practica la votación por medios electrónicos.*

**Sra. Fellner.**- Presidenta: quiero rectificar mi voto. Es negativo.

**Sr. Secretario (Tunessi).**- Resultan afirmativos 17 votos; negativos, 42...

- *Varios señores senadores hablan a la vez.*

**Sr. Secretario (Tunessi).**- Leo el tablero. Lo que ocurre es que hay un voto de la senadora que dijo a viva voz que su voto era negativo. Se va a computar.

El resultado de la votación es 43 a 16, es el resultado de la votación.

**Sr. Mera.**- Rectifico mi voto.

**Sra. Presidente.**- Entonces son 44 a 15.

**Sr. Secretario (Tunessi).**- El senador Mera rectifica su voto. Son 44 a 15.

- *El resultado de la votación surge del acta correspondiente.*<sup>19</sup>

**Sra. Presidente.**- Ahora vamos a tener que votar el dictamen de minoría del artículo 20 y artículo 23;

- *Varios señores senadores hablan a la vez.*

**Sra. Presidente.**- Bueno, es propuesta, no es dictamen. Está bien.

**Sr. Mayans.**- Tenemos el acuerdo de senadores.

- *Varios señores senadores hablan a la vez.*

**Sr. Secretario (Tunessi).**- Se va a votar la propuesta de modificación formulada a los artículos 20 y 23.

**Sra. Presidente.**- Vamos a votar.

- *Se practica la votación por medios electrónicos.*

**Sr. Secretario (Tunessi).**- Resultan afirmativos 44 votos; negativos, 15 votos.

- *El resultado de la votación surge del acta correspondiente.*<sup>20</sup>

**Sra. Crexell.**- Quiero dejar constancia de que se vota con los dos tercios de los presentes.

---

<sup>17</sup> Ver el Apéndice

<sup>18</sup> Ver el Apéndice

<sup>19</sup> Ver el Apéndice

<sup>20</sup> Ver el Apéndice.



**Sra. Presidente.-** Okay. Perfecto. Esto, entonces, vuelve a la Cámara de Diputados.<sup>21</sup>

**Sr. Mayans.-** Pero ratifique que es por dos tercios de los presentes.

**Sra. Presidente.-** Sí. ¿Yo lo tengo que decir también?

- *Varios señores senadores hablan a la vez.*

**Sra. Presidente.-** Se informa cuando se notifica, me dicen acá. Pero igual está dicho por la senadora. Los tres artículos, sí. Perfecto.

- *Varios señores senadores hablan a la vez.*

**Sra. Presidente.-** Corresponde tratar...

**Sr. Secretario (Tunessi).-** Orden del Día N° 542/16. Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión por el que se modifica la ley de impuesto al valor agregado...

**Sr. Pinedo.-** Presidenta...

**Sra. Presidente.-** El senador Pinedo.

**Sr. Pinedo.-** ¿44 a 15 son dos tercios? ¿Dónde?

**Sr. Mayans.-** De los presentes.

**Sr. Pinedo.-** ¿44 a 15? 45 a 14 son dos tercios.

**Sr. Abal Medina.-** No, 30 a 15.

**Sra. Presidente.-** No, no son.

**Sr. Pinedo.-** 44 a 15 no son dos tercios, discúlpeme.

**Sra. Presidente.-** Sí. Está bien, senador Pinedo.

**Sr. Pinedo.-** Sí, ¡pero no es menor!

**Sra. Presidente.-** Sí, sí. Tiene razón, tiene razón. Tiene razón.

Bueno, vamos al próximo Orden del Día.

- *Varios señores senadores hablan a la vez.*

**Sr. Fuentes.-** Hagamos las cuentitas de vuelta.

**Sr. Rozas.-** Hoy es el Día del Plan Universal de Alfabetización. Está bueno, está bueno...

- *Varios señores senadores hablan a la vez.*

**Sr. Mayans.-** Dos tercios de los presentes.

- *Varios señores senadores hablan a la vez.*

**Sr. Secretario (Tunessi).-** Comisión de Presupuesto y Hacienda y de Sistemas y Medios de Comunicación y Libertad de Expresión...

- *Varios señores senadores hablan a la vez.*

**Sr. Fuentes.-** Perdón, 44 votos de 57 presentes son dos tercios. Para que quede claro, porque si no...

- *Varios señores senadores hablan a la vez.*

**Sr. Fuentes.-** Pinedo, 44 votos sobre 57 son dos tercios. Sobre la totalidad del cuerpo no, sobre los presentes.

- *Varios señores senadores hablan a la vez.*

**Sra. Presidente.-** Bueno, igual...

- *Varios señores senadores hablan a la vez.*

**Sra. Presidente.-** Senadores y senadoras, por favor...

Tiene la palabra el senador Abal Medina.

**Sr. Abal Medina.-** Dado que soy el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, para temas numéricos 44 a 15 es casi tres cuartos: 15 más 15 es 30, más 15 son 45. Son casi las tres cuartas partes del Senado.

- *Varios señores senadores hablan a la vez.*

**Sra. Presidente.-** Perdón, vamos ahora...

---

<sup>21</sup> Ver el Apéndice.

- *Varios señores senadores hablan a la vez.*

**Sra. Presidente.-** Senadores y senadoras, por favor, vamos a seguir.

A ver, senador Pichetto.

**Sr. Pichetto.-** Que el miembro informante haga una breve reseña y en el tema de las tarjetas, exactamente lo mismo.

**Sra. Presidente.-** Perfecto. Vamos ahora con...

- *Varios señores senadores hablan a la vez.*

**Sra. Presidente.-** El secretario parlamentario va a leer.

## 17. Modificación de la ley del impuesto al valor agregado (C.D.-146/15.)

**Sr. Secretario (Tunessi).-** Comisión de Presupuesto y Hacienda y de Sistemas y Medios de Comunicación y Libertad de Expresión. Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión por el que se modifica la ley de Impuesto al Valor Agregado. (C.D.-146/15.)

**Sra. Presidente.-** ¿Quién es el miembro informante?

Senador Abal Medina.

**Sr. Abal Medina.-** Señora presidenta: de una manera muy breve, porque todos conocen el proyecto, simplemente lo que hace es incluir los beneficios impositivos que otorga la ley 26.982, de pymes periodísticas, a las empresas periodísticas de soporte digital.

De esta manera lo que se hace es cuidar el principio de igualdad tributaria entre sujetos que desarrollan una misma actividad, básicamente los mismos beneficios de reducción de la alícuota del IVA que tenían los medios periodísticos de formato papel, pasa también a beneficiarse los que son de formato digital.

Como en la comisión se me había preguntado por el costo fiscal, y me parece muy sano y muy bien, hay que decir que el costo fiscal de esta medida es prácticamente mínimo, dado que la disminución de alícuota se hace en una etapa intermedia de la cadena del IVA y por el tipo de empresa, que son básicamente grandes empresas publicitarias, ese IVA se deriva en instancias superiores.

Así que de esta manera con un costo fiscal prácticamente nulo o que, digamos, básicamente se vuelve en la propia cadena del funcionamiento del impuesto, estamos corrigiendo esta iniquidad.

Creo que esto es muy importante decirlo de una manera muy breve, para no abundar, porque todo el mundo sabe de la enorme importancia que tienen y van a ir teniendo cada vez con más razón los medios digitales en un mundo donde Internet ocupa una gran centralidad. Y de esta manera también potenciamos a las empresas que realizan contenidos digitales en la Argentina frente a los gigantes que trabajan en Internet en cuestiones de informática.

Muy breve. Muchas gracias, presidenta.

**Sra. Presidente.-** Muy bien. Muy breve.

Tiene la palabra el senador Rozas.

**Sr. Rozas.-** Señora presidenta y señores senadores: desde el bloque Cambiemos vamos a adherir y a acompañar porque, además, esto lo hicimos en 2015.

Recuerdo al senador Morales, a la senadora Silvia Pérez, al senador Linares y a mí en comisión, porque este tema ya se trató. Y nosotros votamos a favor de la paridad entre medios digitales y medios gráficos y, lógicamente, no tuvimos el voto mayoritario.

Ahora se da la posibilidad. Quiero decir que nosotros nos mantenemos en la misma posición. Nos parece que es un acto de equidad, y vamos a acompañar con el voto favorable lo que expresó el senador Abal Medina.

Asimismo, se incorpora al ordenamiento penal una nueva figura típica dentro del apartado correspondiente a los delitos contra la administración pública para quien proporcione maliciosamente información falsa o datos inexactos en calidad de arrepentido en el marco de un proceso penal. Para estos casos se prevé una pena de prisión de 4 a 10 años.

Esta figura del arrepentido se instrumentará a través de un acuerdo de colaboración celebrado entre el fiscal y la persona que brinde información relevante en el marco del nuevo artículo 41 ter del Código Penal. Allí se consignarán los hechos atribuidos al arrepentido, su grado de participación, el tipo de información que haya proporcionado y el beneficio concreto que se le otorgará a cambio de la colaboración prestada.

Posteriormente, el acuerdo deberá ser homologado por el juez, siempre y cuando se hayan observado todos los recaudos que la norma prevé a los efectos de que no se vea vulnerada ninguna garantía constitucional.

Es preciso señalar que en aquellos casos en que la autoridad judicial disponga el rechazo del acuerdo por entender que no se acredita alguno de los requisitos que la ley prevé, ninguna de las manifestaciones que el imputado haya realizado podrán valorarse en su contra ni en perjuicio de terceros.

Asimismo, se contempla un plazo de un año, prorrogable por un año más para que el juez o el fiscal corroboren el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el arrepentido en el acuerdo, como así también la verosimilitud y utilidad de la información proporcionada.

Un aspecto central de esta figura es el momento procesal en el cual un sujeto podrá aportar la información o los datos que le permitan obtener los beneficios. Aquí estamos frente una de las principales modificaciones que se le introdujeron al texto en el marco del plenario de las comisiones, y que entendemos resulta sustancial a los efectos de convertir a este instituto en una herramienta útil para la investigación de delitos complejos.

La redacción venida en revisión de la Cámara de Diputados expresaba que el acuerdo entre el fiscal y el arrepentido podría realizarse “durante la sustanciación del proceso”.

Esta manda implicaba una amplitud excesiva en cuanto a la oportunidad para brindar datos o información relevante que conllevaba el peligro de la especulación por parte de quien esté siendo investigando. Así, una persona sometida a un proceso penal, en donde la investigación ha tornado adversa su situación, podría dilatar el proceso brindando parcialmente o en cuotas la información con la que cuente, ya sea en la etapa de instrucción, en la etapa de juicio oral, o bien durante la ejecución de la pena.

Por este motivo se decidió dotar de mayor precisión al texto, disponiendo ahora que el acuerdo “deberá realizarse antes de la elevación a juicio, cierre de la investigación preparatoria o acto procesal equivalente”.

Debo decir que las finalidades de este proyecto de Ley han sido compartidas desde su ingreso a esta Cámara por todas las fuerzas políticas y por los senadores y senadoras que participamos de su estudio el plenario de las comisiones. Asimismo, también existe consenso en la incorporación de modificaciones que, a nuestro entender, serán sustanciales para la correcta aplicación de este instituto.

6

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR BRAILLARD POCCARD

**Derecho de acceso a la información pública. (O.D. N° 604/16.)**

Señora presidente:

El acceso a la información pública es uno de los elementos claves de cualquier república democrática y del Estado de Derecho. Esto sobreviene desde la Ciencia Política a través del trabajo pionero de Dahl cuando conceptualiza a las democracias contemporáneas como poliarquías. El factor vital aquí es que históricamente es concebida a la democracia como un gobierno de iguales, pero para determinadas clases o estamentos. Particularmente, el término donde Aristóteles hace referencia al gobierno de todos tiene un carácter exclusivo, ya que comprende solo a la clase fundadora de la *polis* y sus descendientes.

El derecho de acceso a la información se debe presentar “como un derecho fundamental que debe primar en las relaciones Estado-ciudadanía en las democracias republicanas liberales contemporáneas, y en consecuencia se ha de cultivar una cultura de rendición de cuentas y transparencia en las administraciones públicas, no solamente para que la ciudadanía pueda controlar o evaluar a sus representantes, sino para promover una mejor eficiencia y eficacia en la gestión de lo público”. Históricamente, tiene su vertiente moderna con las revoluciones liberales intentando eliminar el absolutismo ideológico, la monarquía fundamentalmente, que operaba a través de la censura como un instrumento de control social de la expresión pública de ideas u opiniones, que los gobiernos tiránicos

entendían como un elemento de ataque a la autoridad del gobierno o al orden social. El mundo que conocemos como occidental, en la práctica, abarcó prácticamente todos los países con modelo republicano, dictando leyes a favor de la libertad de expresión. El primer antecedente patrio lo constituye el decreto de libertad de imprenta de 1811, que prohibía la censura previa salvo en los escritos de contenido religioso. Este derecho se reforzó con la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 de las Naciones Unidas, en consecuencia, transcribimos:

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. En una primera manifestación universal, emerge el derecho a la información al expresar en su texto que el derecho se gozará y ejercerá “sin limitación de fronteras”. A su vez, previene los avances tecnológicos que han de sufrir los medios tradicionales de expresión del pensamiento. En este sentido, con un criterio no restringido sino abierto, refiere tanto a la comunicación entre personas como a las posibilidades de comunicarse “por cualquier medio”.

“El derecho a la libertad de expresión puede ser entendido, a través de dos interpretaciones: en la primera, se refiere a la libertad de expresión asociada al ejercicio de la autonomía personal. Es decir, la posibilidad de expresar las ideas, perspectivas y puntos de vista del individuo, y la segunda, interpretando libertad de expresión como un derecho que implica no solo la protección de quién se expresa, sino que también aspira a asegurar a los receptores la posibilidad de apreciar la más diversa variedad de puntos de vista posibles en torno a un tema determinado” (Saba, Roberto, “Censura indirecta, publicidad oficial y diversidad”, en *Libertad de expresión: debates, alcance y nueva agenda*, Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos). No se puede negar la relación intrínseca que existe entre acceso a la información y la libertad de expresión. Mientras la libertad de expresión como manifestación de la autonomía no parece requerir directamente del derecho al acceso a la información, la libertad de expresión como precondition al proceso de toma de decisiones en un sistema democrático se asocia indiscutiblemente con la libertad de acceso a la información. El sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, desde su creación en 1948, la Organización de Estados Americanos, OEA, ha venido desarrollando el Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, el que ha permitido homologar y comunicar a los distintos sistemas jurídicos nacionales. “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa”. (Principios sobre libertad de expresión, visitar: <http://www.cidh.oas.org/Basicos/Basicos13.htm>).

Como precedente jurisprudencial, una sentencia del 19 de septiembre del 2006, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce el derecho de acceso a la información en poder del Estado. Por otra parte, el 17 de febrero del 2005, el Consejo de la Unión Europea aprobó la “Convención sobre el acceso a la información, la Participación del Público en las tomas de decisiones y el acceso a la justicia en un medio ambiente”. En un sentido amplio la Convención establece que el derecho puede ser ejercido por todas las personas sin la necesidad de demostrar un interés particular en torno a la información requerida sin ningún cobro por la tramitación. En síntesis, el acceso debe ser la norma, y su denegación la excepción para todos los ciudadanos sin que tengan que demostrar un interés personal concreto. Según Dahl, la democracia parte de un principio, el de que todos los miembros de la comunidad política deben ser tratados -bajo la Constitución- como si estuvieran igualmente cualificados para participar en el proceso de toma de decisiones sobre las políticas que vaya a seguir la asociación (Villoria, M., 2006).

En cuanto a la legitimización, conforme a derecho, concurren dos sujetos: a) el activo; b) el pasivo. En ambos casos se ha venido desarrollando con carácter institucional el criterio amplio. El sujeto activo es que cuenta con el derecho del acceso a la información.

Así lo establece el artículo 1º de la Ley Modelo de Acceso a la Información Administrativa para la Prevención de la Corrupción de la OEA:

“Artículo 1º: Derecho de Información y de Acceso a los Expedientes y Actas de carácter administrativo. “Toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier órgano perteneciente a la administración central, descentralizada de entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, empresas e instituciones autónomas, órganos desconcentrados de la administración, y en todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado tenga participación en el capital o en la formación de decisiones societarias; así como del Poder Legislativo y Judicial, salvo disposición en contrario, en cuanto a su actividad administrativa”.

El sentido amplio tiene por propósito conocer la información administrada por el Estado que le pertenece al público. Esto apunta a mejorar la relación entre el Estado y los administrados, como una vía a apuntalar dos tipos de acciones. Una: conocer datos e informaciones que le sirvan al ciudadano para conocer mejor los diversos procesos de funcionamiento del Estado. En la segunda, provocar un mayor control de la labor de los representantes.

Con ésta visión se enlazan: la rendición de cuentas como vínculo primordial de las democracias representativas y la garantía que los gobernantes sean transparentes, y eficientes. Este principio de rendición de cuentas intrínsecamente implica la posibilidad y capacidad de imponer sanciones negativas a los funcionarios y representantes. La articulación de la *accountability* horizontal y vertical requiere de información oficial en cualquiera de sus manifestaciones.

La transparencia va de la mano de la eficiencia en el gasto público: “Un buen ejemplo al respecto lo proporciona Costa Rica, a través del Sistema Nacional de Evaluación, SINE, implementado desde 1996. Esta experiencia sugiere que en ausencia de incentivos materiales que fomente una cultura de gestión orientada a resultados, la rendición de cuentas en foros públicos puede constituirse en un incentivo moral para motivar el uso de las evaluaciones en la mejoría de la gestión. De hecho, el reconocimiento público de los niveles de desempeño institucional y sectorial, constituye el principal mecanismo con que cuenta el SINE, para comprometer y estimular a los gerentes con el cumplimiento de las metas sectoriales, plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo de Costa Rica” (<http://www.eclac.org/publicaciones/xml/7/7777/SesionXII.pdf>).

En el caso de que el acceso a la información sea abierto, nada rígido, y responsivo, se adosan algunos inconvenientes tales como: la posibilidad del uso de herramientas informáticas, la deficiencia estructural en la capacidad del Estado para suministrar la información, los déficits en cultura política para conseguir el control como algo necesario, el exceso burocrático y la falibilidad de la conciencia cívica propia de los países del cono sur. A esto se suma la ausencia de normativas conducentes a asegurar el acceso a la información, segura, confiable y en corto plazo.

Un ejemplo interesante lo constituye la normativa de Honduras que transcribimos, con cita de fuentes:

“En lo que respecta a la definición de plazos de entrega, una ley en su Artículo 21- Ley de transparencia y acceso a la información pública de Honduras” (decreto 170/2006).

Helen Darbishire de Access InfoEurope (2006:265) ha estudiado más de 40 leyes de acceso a la información a nivel mundial y encuentra que un periodo recomendable para tramitar solicitudes es de 14 días hábiles. La recomendación 2002(2) del Consejo de Europa sobre el Acceso a Documentos Oficiales establece en el principio VI.4: “Si la autoridad pública no posee el documento oficial requerido, debería, cuando sea posible, derivar al solicitante a la autoridad pública competente”. El objetivo de responsabilizar a la entidad pública, sirve para aliviar el fenómeno “ping-pong” de mantener al solicitante de una agencia a otra sin encontrar respuesta a su solicitud muy ambiciosa con plazos cortos e imposibles de satisfacer de manera consistente, puede socavar la efectividad de la norma, y la pérdida de credibilidad en la política de transparencia y acceso a la información. La LTAI de Honduras, considera que diez días es un plazo razonable para tramitar una solicitud de información, pudiendo ser prorrogable por un periodo de igual duración, según se justifique las circunstancias. En la práctica, el cumplimiento con un tiempo abreviado puede ser difícil, considerando las limitantes en infraestructura técnica y recurso humano capacitado, sin olvidar las constricciones presupuestarias y la trayectoria histórica de la administración pública. Además de referirse a los plazos, la ley debe incluir un procedimiento específico y obligatorio para la transferencia, (donde la solicitud es internamente redirigida dentro de la misma entidad) o derivaciones (cuando la información se encuentre en poder de otra agencia y se orienta al solicitante hacia esta agencia) de solicitudes.

La posibilidad de brindar la información, también admite normativamente limitaciones. Estas deben considerarse con carácter excepcional. Generalmente se acude a categorizar la información como reservada, confidencial, de seguridad nacional, o de resguardo del legítimo interés público. Para evitar ambigüedades sobre qué información se podría brindar o apelar a la negativa, existen casos donde desde una Carta Magna, la legislación derivada, o la jurisprudencia se promueve el acceso con carácter amplio, siendo lo restrictivo la excepción.

La Constitución de Chile prescribe:

“Artículo 8°.- El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones.

“Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, solo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquellos o de estos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.

“El presidente de la República, los ministros de Estado, los diputados y senadores, y las demás autoridades y funcionarios que una ley orgánica constitucional señale, deberán declarar sus intereses y patrimonio en forma pública.

“Dicha ley determinará los casos y las condiciones en que esas autoridades delegarán a terceros la administración de aquellos bienes y obligaciones que supongan conflicto de interés en el ejercicio de su función pública. Asimismo, podrá considerar otras medidas apropiadas para resolverlos y, en situaciones calificadas, disponer la enajenación de todo o parte de esos bienes”.

De acuerdo al informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, las consecuencias elementales para convertir al Estado en una entidad responsiva ante los requerimientos de la ciudadanía son:

Primera consecuencia del principio de máxima divulgación: el derecho de acceso a la información es la regla y el secreto la excepción.

Segunda consecuencia del principio de máxima divulgación: la carga probatoria en caso de establecer limitaciones al derecho de acceso a la información corresponde al Estado.

Tercera consecuencia del principio de máxima divulgación: la preeminencia del derecho de acceso a la información en caso de conflictos de normas o de falta de información.

En la Argentina, atento a la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se debe entender una postura facilitadora del criterio amplio, al obligar en el caso “Chevron” a las partes signatarias, a divulgar las cláusulas secretas del Convenio suscripto oportunamente, en el área de las empresas vinculadas a la minería con el Estado.

Por último, el derecho de acceso a la información a su vez, se ha reconocido de manera independiente a la creación de un organismo específico que satisfaga las peticiones ciudadanas. En ocasiones la Defensoría del Pueblo o el Ombudsman, han desempeñado un rol esencial en cuanto a la concientización de los derechos ciudadanos, y a la supervisión respecto del cumplimiento de las leyes que obligan al sector público. Todo ello, con motivo de hacer comprender que sin acceso a la información se resienten la transparencia, la calidad de vida y la performance del funcionariado en cualquiera de sus ramas. Esto dinamiza dos principios, el acceso a la información como correlato de la libertad de expresión, lo que convierte al ciudadano en sujeto activo que cuenta con una potestad absoluta para peticionar, aunque la obligación de brindar la información puede estar condicionada legalmente, y un reconocimiento constitucional del derecho de controlar la responsabilidad de los agentes, funcionarios y magistrados. Esto no implica una concesión del poder del Estado, porque no son los poderes constituidos los que están facultados para decidir cuándo, cómo, porque, y a quienes, se debe suministrar la información requerida. En buena medida cada vez que se discute el organismo adecuado, los especialistas en su mayoría son partidarios de constituir un ente no dependiente de los Poderes constituidos, con financiamiento propio, y autarquía plena.

7

**SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA LUNA**  
**Modificación de la ley de tarjetas de crédito. (O.D. N° 545/16 y anexo.)**

Señora presidente:

Quiero manifestar mi adhesión al proyecto tendiente a limitar las comisiones que por el uso de tarjetas de crédito y débito las entidades financieras cobran a los comercios de todo el país.

Este proyecto que viene a modificar la actual ley que fija aranceles para operar con tarjetas de crédito y débito actualmente en un valor del 3% y 1,5%, respectivamente, refleja la demanda de los comercios de todo el país que reclaman por respuestas concretas e inmediatas.

En mi caso en particular estuve en permanente contacto con comerciantes de mi provincia y voto convencida de que esta iniciativa favorece a los negocios minoristas de nuestro país que necesitan incentivos para reactivar el mercado en un contexto económico de contracción del consumo.

En el primer semestre del año la caída de la actividad general de la economía y en particular del consumo impactó en los comercios de todo el país, con una pérdida en las ventas que rondan los \$34.000 millones y con el cierre de al menos 6.300 negocios durante el transcurso del presente año.

En este contexto mantener la transferencia de dinero de los comercios a los bancos por comisiones de pagos con las tarjetas realmente nos parece abusivo. Por eso venimos a definir nuestra postura respecto a si ponemos un límite al poder de imposición de sectores concentrados o si damos respuesta a las pymes.

La coyuntura económica nos obliga a tener definiciones contundentes y fundamentalmente cuando hay actividades monopólicas que requieren de un Estado presente que intervenga con leyes concretas.

Recordemos que según las últimas cifras los comercios transfirieron en el último año alrededor de \$14.500 millones a los bancos por comisiones de tarjetas de débito y crédito en un contexto de escaso margen de negociación para los comercios, al por ejemplo Visa concentrar el 70% de los plásticos que hay en el mercado.

Por último, remarco la necesidad de avanzar en transparente el costo financiero que los bancos imponen a los comercios y consumidores de todo el país.

Por todo lo expuesto y bajo el convencimiento de que estamos dando media sanción a un proyecto en favor de los comercios pymes y consumidores de nuestro país, manifiesto mi voto afirmativo.

8

**SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA CREXELL  
Derecho de acceso a la información pública. (O.D. N° 604/16.)**

Señora presidente:

El proyecto que nos convoca fue ingresado en la Cámara de Diputados<sup>1</sup>, donde obtuvo media sanción con apoyo unánime de los legisladores de los distintos sectores políticos.

En este Honorable Senado de la Nación se efectuó un amplio debate del cual participaron distintas organizaciones de la sociedad civil y expertos en la temática, quienes aportaron observaciones y diversas sugerencias. En atención a que ellas no fueron receptadas en el dictamen de mayoría del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Presupuesto y Hacienda y de Justicia y Asuntos Penales, es que propuse un dictamen en minoría.

Cabe señalar que en el debate que nos ocupa nuestra Cámara, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 77 a 84 de la Constitución Nacional, actúa como revisora del proyecto sancionado en Diputados. En el presente proyecto, y pese a las observaciones y propuestas recibidas, no se introdujo ningún cambio en el dictamen de mayoría, lo que entiendo desvirtúa la esencia del sistema bicameral adoptado por nuestra Constitución Nacional, cuestión que desarrollaré más adelante.

En cuanto al objeto de la propuesta, ella tiende a garantizar el efectivo acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública.

Ello involucra la pretensión de regular el acceso a la información pública en todas las áreas del Estado, conteniendo a tal efecto una definición del alcance de tal información y determinando las circunstancias y procedimientos para requerir aquella, como también las limitaciones y excepciones y las vías de reclamo frente a ello.

Se trata, en definitiva, de regular los mecanismos para garantizar a todo ciudadano el acceso a la información pública, no solo en el Estado sino también en otras entidades y organizaciones.

Corresponde destacar, que el derecho de acceso a la información pública constituye un derecho humano fundamental, consagrado en diversos tratados internacionales con reconocimiento constitucional en el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción.

Además, debe considerarse también como un principio que hace al régimen republicano de gobierno consagrado en la Constitución Nacional, que requiere como elemento esencial la publicidad de los actos de gobierno.

En el mismo sentido, lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en numerosos fallos, tales como “ADC”, “CIPPEC”, “Chevron”, entre otros, como también la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los fallos “Claude Reyes” y “Gomes Lund”.

*1. Antecedentes del proyecto*

Cabe mencionar que se trata de una normativa que tiene muchos antecedentes de proyectos presentados por diversos diputados y senadores, inclusive existieron medias sanciones de ambas Cámaras de proyectos que luego perdieron estado parlamentario.

El proyecto en cuestión es de iniciativa del Poder Ejecutivo, pero él mismo destaca en su exposición de motivos la existencia de tales antecedentes anteriores, circunstancia que ha sido puesta de

---

<sup>1</sup> Expediente P.E.-8/16.

resalto por diferentes legisladores en ocasión de su tratamiento por la Cámara de Diputados y en las reuniones de comisión de esta Honorable Cámara.

La iniciativa tomó algunas sugerencias que efectuaron quienes fueron consultados como expertos, como también lo propuesto en los proyectos de las diputadas Conti, Stolbizer y Camaño. Solo hubo cuatro abstenciones.

Puntualmente, en la Cámara de Diputados se tomaron en consideración las siguientes iniciativas:

- 1658-D-2015 diputada Laura Alonso
- 1680-D-2015 diputado Víctor Hugo Maldonado
- 6145-D-2015 diputado Oscar Ariel Martínez
- 6593-D-2015 diputados Karina Banfi, Alejandro Carlos Augusto Echegaray, José Luis Riccardo, Francisco Javier Torroba, Ricardo Luis Alfonsín, Ana Clara Carrizo, Jorge Marcelo D'agostino, Mario Raúl Negri, Miguel Nanni, Marcelo Alejandro Monfort, Martín Osvaldo Hernández, Miguel Ángel Basse, Mario Domingo Barletta, Luis Gustavo Borsani, Gabriela Romina Albornoz
- 71-D-2016 diputada Ivana María Bianchi
- 148-D-2016 diputados Diana Beatriz Conti, Ana Carolina Gaillard, Araceli Ferreyra, María Emilia Soria, Luis Francisco Jorge Cigogna
- 299-D-2016 diputados Elisa María Avelina Carrió, Leonor María Martínez Villada, Fernando Sánchez, Alicia Terrada
- 417-D-2016 diputada Margarita Rosa Stolbizer
- 581-D-2016 diputada Graciela Camaño
- 809-D-2016 diputado Luis Alfonso Petri
- 1108-D-2016 diputado Hugo María Marcucci
- 1147-D-2016 diputados Héctor Daniel Tomas, José Luis Gioja, Sandra Daniela Castro
- 1529-D-2016 diputados Diego Luis Bossio, Pablo Kosiner, Héctor Olindo Tentor, Carlos Gustavo Rubin
- 1543-D-2016 diputados Franco Agustín Caviglia y Rubén Darío Giustozzi
- 1602-D-2016 diputada Gabriela Alejandra Troiano

En las reuniones de comisión de esta Cámara se consideraron los siguientes proyectos:

- S-2060/15 senador Juan M. Irrazábal
- S-3240/15 senador Fernando E. Solanas
- S-3832/15 senador Juan M. Abal Medina
- S-3934/15 senadora Norma E. Morandini
- S-4074/15 senador Ángel Rozas
- S-4128/15 senadora María M. Odarda
- S-24/16 senadores Juan M. País, Rodolfo J. Urtubey, Cristina Fiore Viñuales, Juan M. Irrazábal, Omar A. Perotti, Beatriz G. Mirkin, Dalmacio E. Mera, Ruperto E. Godoy, Miguel A. Pichetto, Pedro G. Á. Guastavino, Nancy S. González.
- S-225/16 senador Daniel R. Pérsico
- S-611/16 senador Luis C. Petcoff Naidenoff
- S-1081/16 senador Juan C. Marino
- S- 2236/16 senadora Silvia del Rosario Giacoppo

Asimismo, deseo destacar que el proyecto en líneas generales se ajusta a los estándares y previsiones de la legislación comparada y los tratados internacionales de derechos humanos. En ese sentido deseo destacar que se tomaron como fuentes:

– La Freedom of Information Act, de los Estados Unidos de América, de 1966, en la cual toda agencia gubernamental debe responder a cualquier pedido específico de información sobre los archivos, fichas, informes dentro de un período limitado de tiempo.

– La Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 13.1: “...La libertad de pensamiento y de expresión...comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”.

– La Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 19: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

– El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 19-2: “Toda persona tiene el derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.



– La Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción, artículos 10 y 13, así como la Convención Interamericana contra la Corrupción, párrafo 5 de su Preámbulo y artículos III.II y XIV, promueven la transparencia, el acceso a la información pública y la participación de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción.

– La Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública aprobada por la Asamblea General de la OEA en el año 2010.

## 2. Análisis del proyecto.

El proyecto consta de 40 artículos. Comienza con un título preliminar en cual se describe el objeto y los principios que rigen el acceso a la información. Luego contiene el título I, Derecho de Acceso a la información Pública, que tiene 5 capítulos (Régimen General; Excepciones; Solicitud de información y Vías de Reclamo; Agencia de Acceso a la Información Pública y Responsables de Acceso a la Información Pública). El título II se denomina Transparencia Activa, y el título III, Disposiciones de Aplicación Transitoria.

Puntualmente en lo que hace al contenido del proyecto que se trata, seguidamente se hace una síntesis de los principales aspectos a tener en cuenta.

2. 1. Se inicia con un título preliminar que establece el objeto de la ley. En el debate en Diputados se incorporó además una serie de principios aplicables al acceso a la información (presunción de publicidad; transparencia y máxima divulgación; informalismo; máximo acceso; apertura; disociación; no discriminación; máxima premura; gratuidad; control; responsabilidad; alcance limitado de las excepciones; la regla in dubio *pro petitor*; facilitación, y buena fe). Este agregado corresponde a previsiones contenidas en proyectos antecedentes.

2. 2. El título I contiene las normas específicas de la materia que se trata, el cual se divide en capítulos.

2. 2. 1. El capítulo I regula el régimen general del acceso a la información pública, con relación al cual cabe destacar las normas sobre:

– Definición del derecho de acceso a la información pública (artículo 2º), el cual comprende la posibilidad de buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y distribuir libremente la información bajo custodia de los sujetos obligados. Se trata de un régimen amplio.

– En el artículo 4º se establece la legitimación activa, es decir, se dispone quiénes pueden solicitar o requerir información pública. Se prevé que toda persona humana o jurídica pública o privada tiene derecho a solicitar y recibir información pública, con el agregado de que no es posible exigir al solicitante que motive o funde la solicitud o que acredite un derecho subjetivo o un interés legítimo o que cuente con patrocinio letrado. Basta con que pida la información y el único requisito que debe cumplir es el de identificarse, y también precisar la información que se requiere.

– El artículo 5º dispone las condiciones por las cuales debe ser entregada la información solicitada, la cual debe ser brindada en el estado en que se encuentre al momento de la solicitud, no estando obligado el sujeto requerido a procesarla o clasificarla. Una cuestión importante a resaltar, es que la norma dispone la obligación de adoptar formatos digitales abiertos para su entrega, salvo casos excepcionales de imposible cumplimiento o que signifique un esfuerzo estatal desmedido.

– El artículo 6º establece que el acceso a la información es gratuito en tanto no se requiera su reproducción, siendo en este caso, los costos a cargo del solicitante.

– El artículo 7º contempla el ámbito de aplicación, esto es, los obligados a difundir la información y permitir el acceso a la información pública.

Allí están comprendidos: la administración pública nacional, conformada por la administración central y los organismos descentralizados; el Poder Legislativo y los órganos que funcionan en su ámbito; el Poder Judicial de la Nación; el Ministerio Público Fiscal de la Nación; el Ministerio Público de la Defensa; el Consejo de la Magistratura; las empresas y sociedades del Estado que abarcan a las empresas del Estado, las sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta, y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias; las empresas y sociedades en las cuales el Estado nacional tenga una participación minoritaria, en lo referido a participación estatal; los concesionarios, permisionarios y licenciarios de servicios públicos o concesionarios permisionarios de uso del dominio público en la medida en que cumplan servicios públicos y en todo aquello que corresponda al ejercicio de la función administrativa delegada; y contratistas, prestadores y prestatarios bajo cualquier forma o modalidad contractual; las organizaciones empresariales, partidos políticos, sindicatos, universidades y cualquier entidad privada a la que se le otorguen fondos públicos en lo que se refiere a información relacionada con ellos; las instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado nacional; las personas

jurídicas públicas no estatales en todo aquello que estuviese regulado por el derecho público y en lo que se refiere a la información producida o relacionada con los fondos públicos recibidos; los fideicomisos que se constituyeren total o parcialmente con recursos o bienes del Estado nacional; los entes cooperadores con los que la administración pública nacional hubiera celebrado o celebre convenios de cooperación técnica o financiera; el Banco Central de la República Argentina, y los entes interjurisdiccionales en los que el Estado nacional tenga participación o representación.

Se incluyó en Diputados a los concesionarios, explotadores y permisionarios de juegos de azar, destreza y apuesta.

El incumplimiento de lo dispuesto en el proyecto, será considerado causal de mal desempeño.

2. 2. 2. El capítulo II (que se integra con el artículo 8º) prevé las excepciones.

La excepción más importante es la del inciso a), que se refiere a la información expresamente clasificada como reservada o confidencial o secreta, por razones de defensa o política exterior.

También está exceptuada la información que pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario; los secretos industriales, comerciales, financieros, científicos, técnicos o tecnológicos; la información que comprometa los derechos o intereses legítimos de terceros obtenida en carácter confidencial; la información en poder de la Unidad de Información Financiera, que es la que se ocupa del tratamiento de los posibles hechos de lavado de activos de origen ilícito; la información elaborada por los sujetos obligados dedicados a regular o supervisar instituciones financieras; la información elaborada por asesores jurídicos o abogados de la administración pública cuya publicidad pudiera revelar o perjudicar la estrategia de defensa; la información protegida por el secreto profesional; la información referida a datos personales; la que pueda ocasionar peligro a la vida o seguridad de una persona; la de carácter judicial y la obtenida en investigaciones realizadas por los sujetos obligados que tuviera el carácter de reservada y cuya divulgación pudiera frustrar el éxito de una investigación.

En Diputados se incorporó una excepción referida a las sociedades anónimas que hacen oferta pública, que están sujetas a un régimen especial que es precisamente el de oferta pública.

También se incorporó al final de ese artículo un párrafo que establece que las excepciones referidas no serán aplicables en caso de graves violaciones de derechos humanos, genocidio, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad.

2. 2. 3. El capítulo III regula lo relativo a la solicitud de información y las vías de reclamo.

Con relación a ello, en el artículo 9º se consagra un procedimiento sencillo, regido, entre otros, por el principio del informalismo. Esto quiere decir que basta con que quien desea obtener información de algunos de los sujetos obligados definidos en el artículo 7º de la norma la solicite de manera absolutamente informal y gratuita. No hay ninguna forma preestablecida para requerir esa información.

Se contempla un plazo de quince días hábiles para satisfacer la información por el obligado, con la posibilidad de una prórroga excepcional por otros quince días (artículo 11).

Vinculado a la denegatoria, se establece que requerirá acto fundado, y procederá solo si la información no existe, el requerido no está obligado a producirla o se presenta alguna de las excepciones previstas (artículo 13). En Diputados se agregó que la falta de fundamentación determina la nulidad del acto.

Para el caso de que la información sea denegada, la iniciativa en su artículo 14 contempla dos posibilidades. La primera es el reclamo administrativo ante la Agencia de Acceso a la Información Pública o ante el mismo órgano requerido, que debe elevarlo ante la primera (esto último agregado en Diputados). Se regula lo relativo a los requisitos formales y la resolución de ese reclamo.

La segunda vía es la judicial, que debe realizarse mediante la acción de amparo. La vía del amparo fue incorporada en Diputados, estableciéndose también que debe plantearse dentro de los cuarenta días de notificada la denegatoria.

Se contempla también en este capítulo, que el funcionario público o agente responsable que en forma arbitraria obstruya el acceso a la información pública solicitada o la suministra en forma incompleta, incurre en falta grave sin perjuicio de las demás responsabilidades que le quepan (artículo 18).

2. 2. 4. El capítulo IV se refiere a la creación de la Agencia de Acceso a la Información Pública, que va a actuar como ente autárquico en la órbita del Poder Ejecutivo, pero con autonomía funcional. Tiene a su cargo velar por el cumplimiento de los principios y procedimientos de la ley, y garantizar el efectivo acceso a la información pública (artículo 19).

Está a cargo de un director, que tendrá rango de Secretario y durará en su función cinco años (artículo 20).

Se contemplan los recaudos para su designación y remoción. Respecto a esta última se requiere de un dictamen de una comisión bicameral presidida por el presidente del Senado e integrada por los

presidentes de determinadas comisiones, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. En Diputados se estableció que ese dictamen tendrá carácter vinculante (artículos 21 y 27).

La iniciativa también contempla que en aquellos otros poderes del Estado que son independientes del Poder Ejecutivo (Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Consejo de la Magistratura), se creen organismos similares a la Agencia de Acceso a la Información Pública, que tendrán la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la ley y de resolver los conflictos en esos otros órganos (artículo 28).

En este capítulo se contempla también la creación de un Consejo Federal para la Transparencia, integrado por todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como organismo interjurisdiccional permanente, que tendrá por objeto la cooperación técnica y la concertación de políticas en materia de transparencia y acceso a la información pública. Estará integrado por un representante de cada jurisdicción, que deberán ser los funcionarios de más alto rango en la materia, y será presidido por el Director de la Agencia de Acceso a la Información Pública (artículo 29).

2. 2. 5. El capítulo V contempla los Responsables de acceso a la información pública. Se trata de la obligación de cada uno de los sujetos obligados de nombrar un responsable que debe tramitar las solicitudes de acceso a la información pública dentro de su jurisdicción. A su respecto se establecen las funciones y obligaciones (artículos 30 y 31).

2. 3. El título II contiene normas referidas a la transparencia activa. Se trata de previsiones que deben cumplir los sujetos comprendidos en la ley, para facilitar la búsqueda y acceso a la información pública a través de su página oficial de la red informática (artículos 32 a 34).

2. 4. Finalmente, en el título III se establecen normas transitorias. La más relevante es la que prevé el plazo de un año para la entrada en vigencia de la ley, en cuyo lapso los sujetos obligados deberán adaptarse para darle cumplimiento (artículo 38).

También se contemplan cuestiones presupuestarias, y la invitación a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir (artículos 35 y 36).

Finalmente, en Diputados se incluyó una disposición que establece que hasta tanto los poderes y organismos independientes del Ejecutivo no creen un organismo con las funciones de la Agencia de Acceso a la Información Pública, ésta cumplirá esas funciones respecto de los que carezcan de aquel (artículo 39).

### 3. Consideraciones sobre el proyecto

El Mensaje del Poder Ejecutivo<sup>2</sup> establece que esta ley se fundamenta en el “principio republicano de publicidad de los actos de gobierno y en el derecho de acceso a la información pública derivados de los artículos 1º, 33 y 38 de la Constitución Nacional y por los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos a los que el artículo 75, inciso 22, les otorga jerarquía constitucional”.

Asimismo, se expresa que, al permitir el ejercicio del derecho de acceso a la libertad de expresión, se permitirá a su vez, poder contar con opiniones informadas sobre los diversos asuntos públicos. Esto permitirá tomar mejores decisiones, controlar la gestión pública, aumentar la participación ciudadana y el contralor de los actos de gobierno.

Entiendo que el presente proyecto de ley constituye una herramienta de política activa en materia de ética pública, transparencia en la gestión pública, participación de la ciudadanía, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción. Todo ello me convoca a efectuar algunas reflexiones al respecto.

En lo que hace al sustento constitucional del derecho de acceso a la información pública, es dable recordar que la reforma constitucional de 1994 amplió considerablemente los derechos reconocidos en la Constitución de 1853. En lo que hace al acceso a la información, el constituyente lo contempló en cierto modo en los artículos 41 y 42 de la Constitución Nacional, dentro de los derechos al medio ambiente y de los consumidores y usuarios; como en el artículo 38, en la obligación de los partidos políticos de dar publicidad del origen y destino de los fondos y patrimonio.

En materia de acceso a la información, corresponde recordar como ya lo mencionara, lo sostenido al respecto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “Asociación por los Derechos Civiles c/ PAMI”, donde reconoció la importancia del derecho de acceso a la información pública al manifestar que: “El fundamento central del acceso a la información en poder del Estado

---

<sup>2</sup> También se pone de resalto que el proyecto forma parte de la política de Estado Justicia 2020, que propone un espacio de diálogo institucional y ciudadano, que busca construir una justicia cercana, moderna, transparente e independiente, cuyo objetivo es lograr una transformación integral de las instituciones a través de un proceso de participación, guiado por la pluralidad de voces e ideas. Dentro de los objetivos de la mencionada política de Estado se encuentran mencionados: la transparencia institucional y la lucha contra la corrupción, a fin de permitir el acceso a la información pública para controlar la gestión de los funcionarios públicos y su rendición de cuentas.

consiste en el derecho que tiene toda persona de conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan, mediante el acceso a la información”. Reforzando este criterio, en la causa “CIPPEC c/ Estado nacional - Ministerio Desarrollo Social - decreto. 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, nuestro máximo tribunal puso de manifiesto la necesidad de contar con una ley que regule el acceso a la información a nivel nacional e instó en la misma decisión a los legisladores a sancionarla.

Ahora bien, la iniciativa establece diversos principios generales entre los que se destacan los de gratuidad, informalismo, presunción de publicidad, transparencia y máxima divulgación, disociación, máxima premura y el principio in dubio *pro petitor*, en torno a los cuales deberá aplicarse e interpretarse la norma tanto por los particulares como por los sujetos obligados. Esto resulta sumamente beneficioso, dado que se restringe notablemente la facultad de discrecionalidad del sujeto requerido a brindar la información solicitada.

Sin perjuicio de lo cual entiendo necesario incorporar el principio de accesibilidad e inclusión a la información por el cual la información pública debe garantizar su disponibilidad en formatos abiertos que admitan la posibilidad de ser consultada, comprendida y entregada a las personas con discapacidad sin que puedan establecerse limitaciones físicas que obstruyan su acceso.

Ello tiene sustento en el artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional que garantiza la igualdad real de oportunidades y trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y en especial a favor de las personas con discapacidad, niños, ancianos y mujeres.

De ahí que en mi dictamen en minoría propongo se agregue tal principio al artículo 1º, in fine.

Puntualmente, en relación al régimen general es importante destacar que la información puede ser solicitada por toda persona humana o jurídica, sin que se le pueda exigir una motivación, ni que acredite un derecho subjetivo o interés legítimo, ni que cuente con patrocinio letrado.

Entiendo que la finalidad del derecho de acceso a la información pública tiene que ver con la transparencia en los actos de gobierno y con la participación ciudadana y el control como ciudadanos respecto de los tres poderes del Estado.

En este sentido debo destacar el caso “Claude Reyes vs. Chile” debatido en el seno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 2006, donde la CIDH destacó que el derecho de acceso a la información pública es parte integrante del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, del derecho a la comunicación y que como tal nos permite como ciudadanos ejercer otros derechos.

Si bien, las excepciones contempladas en el artículo 8º son taxativas, y las estrictamente necesarias para el funcionamiento de una sociedad democrática, no obstante, considero que dicha previsión dispone algunos retrocesos en aspectos centrales del sistema de acceso a la información, que como afirmare, es un derecho humano, tal como lo sostenido la Corte Interamericana en el mencionado caso “Claude Reyes”, y por lo tanto está alcanzado por el principio de no regresividad o progresividad, en cuanto a su legislación.

Por lo que considero que en este aspecto el proyecto sancionado en la Cámara de Diputados iría a contramano de algunos estándares que se han consolidado en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pronunciamientos valiosos que reconocen con más amplitud el acceso a la información que el proyecto que estamos tratando.

Por lo que entiendo, si no se receptaran algunas modificaciones propuestas, se aprobará una protección sustancialmente menor que la que estaba vigente<sup>3</sup>, y por ello violaría el principio de no regresividad en materia de derechos humanos.

En relación a los supuestos de excepción propongo modificaciones tal como surge del Dictamen en Minoría de mi autoría:

– Inciso *a*) dado que no contempla un plazo por el cual la información es calificada como reservada o confidencial o secreta, considero que debería constar cuando se debe dar a publicidad y establecer una fecha. A tal fin propongo, siguiendo la Ley Modelo de la OEA: “La información expresamente clasificada como reservada o confidencial o secreta, no podrá exceder el plazo máximo de doce (12) años, salvo que mediaré prórroga por idéntico plazo. Vencido dicho plazo, la información se considera pública y de libre acceso”. Asimismo, se realiza un ajuste respecto de la información clasificada por “razones de seguridad” en el primer párrafo, a los fines de guardar uniformidad con lo previsto en el segundo párrafo, que incluye “seguridad”.

– Inciso *e*) tal como lo mencionaron algunos especialistas, con la redacción aprobada en Diputados<sup>4</sup> parecería que se exceptúa a la Unidad de Información Financiera (UIF) de todo pedido de

<sup>3</sup> Actualmente el decreto 1172/03 establece un plazo de 10 días para contestar la solicitud de información pública mientras que el proyecto en cuestión prevé un plazo de 15 días.

<sup>4</sup> Información en poder de la Unidad de Información Financiera encargada del análisis, tratamiento y transmisión de información tendiente a la prevención e investigación de la legitimación de activos provenientes de ilícitos.

información pública; por lo que considero reemplazarlo por lo siguiente: “Información sensible sometida al análisis de la Unidad de Información Financiera y cuya revelación pudiera comprometer su función”.

– Inciso i), “Información que contenga datos personales, que no pueda brindarse aplicando técnicas de disociación”.

Cabe resaltar que el proyecto original presentado por el Poder Ejecutivo preveía la excepción para “datos personales de carácter sensible”<sup>5</sup>, que es la redacción del decreto 1172/03 que rige para el Poder Ejecutivo nacional y que a último momento se modificó en Diputados, con un criterio más restrictivo. Al eliminarse la palabra “sensible” y hacer alusión a “todo tipo de datos personales”, el texto puede dar lugar a una restricción indebida del acceso a la información pública. Si bien la interpretación actual de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDP) es la correcta, durante los últimos años tuvo una interpretación sumamente restrictiva que dejó fuera del acceso a la información, lo relacionado a información de subsidios a entidades sin fines de lucro, declaraciones juradas y campañas públicas realizadas por el Estado nacional. De ahí que, con el nuevo texto, es suficiente que un sujeto obligado diga que se trataría de datos personales, por lo cual quedarían afuera de la ley.

Considero importante destacar las previsiones de la Ley Modelo de la OEA que expresamente exceptúa “datos personales que puedan afectar la intimidad”, lo que se ve receptado en diversos cuerpos normativos de nuestro país, tales como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las Provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Catamarca, Córdoba y Entre Ríos, que exceptúan a los “datos sensibles o datos que tengan que ver con la intimidad”.

Con la modificación introducida en Diputados se restringiría en forma absoluta el acceso a la información contrariando lo dispuesto por la Corte Suprema en el fallo “CIPPEC”, que dispuso la obligación del Estado de dar la información sobre planes sociales, ante su negativa, aduciendo que había datos personales.

Por ello se presentaría una situación atípica dado que la Ley de Protección de Datos Personales, ley 25.326, protegería en menor medida los datos personales que la Ley de Acceso a la Información Pública que está para garantizar que cualquier ciudadano tenga acceso a la información del Estado.

Por otra parte, entiendo que los datos sensibles constituyen una excepción que tiende a proteger solo los datos de las personas físicas, mientras que la denominación “datos personales” comprende también a personas jurídicas de conformidad con lo sostenido por nuestra Corte en el mencionado fallo “CIPPEC”: “los datos sensibles y los datos de intimidad no protegen a las personas jurídicas”.

Por lo que propongo la siguiente redacción: “i) Información referida a datos personales de carácter sensible –en los términos del artículo 2º de la Ley de Protección de los Datos Personales, 25.326, y sus modificatorias–, o el régimen que eventualmente la sustituya, salvo que se contara con el consentimiento expreso de la persona a la que se refiera la información solicitada”.

– Inciso m), “Información correspondiente a una Sociedad Anónima sujeta al régimen de oferta pública”. Cabe destacar que es el único inciso que en cuanto a las excepciones se refiere a un sujeto y no a la naturaleza de la información.

Por otro lado, merece consideración especial lo vinculado a esta cuestión que fuere oportunamente sostenido por nuestro Máximo Tribunal en el conocido Fallo “Chevron”<sup>6</sup>. En el fallo

<sup>5</sup> Se entiende por dato sensible “toda información de origen racial y étnico, información referente a la salud o vida sexual, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical”.

<sup>6</sup> En el conocido fallo “Chevron”: el derecho de buscar y recibir información ha sido consagrado expresamente por la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que la Corte Interamericana ha dado un amplio contenido al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, a través de la descripción de sus dimensiones individual y social. Con cita de los precedentes “ADC” y “CIPPEC”, la Corte destaca que la libertad de información es un derecho humano fundamental y que abarca el derecho a juntar, transmitir y publicar noticias y contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, que tiene por objeto asegurar que toda persona pueda conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan. Con base en estos principios, la sentencia destaca que el Poder Ejecutivo nacional no solo dispone del 51% de las acciones de la sociedad, sino que además ejerce un rol preponderante en su gobierno y cuenta con el poder para determinar sus decisiones. Este poder se ve manifestado, entre otros aspectos, en el hecho de que la Presidenta de la Nación haya designado al gerente general y de que el Ministro de Economía forme parte del directorio. Por ello, la Corte arribó a la conclusión de que YPF SA se encuentra bajo la órbita del Poder Ejecutivo nacional y, por lo tanto, debe permitir a cualquier persona el acceso a información relacionada con sus actividades. La empresa desempeña importantes y trascendentes actividades en las que se encuentra comprometido el interés público, por lo que no puede admitirse, en el marco de los principios de una sociedad democrática, que se niegue a brindar información que hace a la transparencia y a la publicidad de su gestión.

YPF SA no puede ampararse en normas destinadas a la búsqueda de eficiencia económica y operativa para evadir la obligación de garantizar y respetar el derecho de acceso a la información. Más aún si se considera que este derecho corresponde a cualquier persona para ejercer el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que pueda cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento a las funciones públicas. La Corte agrega que si bien en determinadas y excepcionales situaciones el derecho de acceso a la información puede estar sujeto a ciertas limitaciones, no se demostró que el caso fuese uno de esos supuestos excepcionales. En particular, las imprecisas y genéricas afirmaciones que formuló YPF SA en la causa no son

mencionado, la Corte Suprema consideró que el hecho de cotizar en Bolsa no exime a las sociedades de brindar información a los órganos de contralor, porque el control que ejerce la sociedad civil, es un control de naturaleza distinta y de ninguna forma puede obviarse el cumplimiento del régimen de acceso a la información por la circunstancia de tener que brindar información a órganos de contralor por parte de estas sociedades.

El fallo destaca que la libertad de información es un derecho humano fundamental, que abarca el derecho a juntar, transmitir y publicar noticias y contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, que tiene por objeto asegurar que toda persona pueda conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan.

Es decir que con lo dispuesto en este inciso incorporado en Diputados se deja afuera a las empresas y a las sociedades anónimas que cotizan en Bolsa. Es un punto que excluiría a importantes empresas que tienen participación estatal, como YPF que es uno de los sujetos que debe quedar incluido según el mencionado fallo.

Esta excepción no está contemplada en ningún otro régimen de acceso a la información pública que he analizado. La misma genera una situación de desigualdad con las empresas de servicios públicos porque no todas cotizan en Bolsa.

El fundamento para exceptuar a tales sociedades es que ellas ya le dan toda su información a la Comisión Nacional de Valores, lo que entiendo parecería irrelevante porque hay muchas sociedades en la misma situación. Además, dicha información tiene que ver con los estados contables y con sus ganancias, pero no con información que puede resultar necesaria e imprescindible para la sociedad civil (vgr. Una empresa de servicios públicos vinculada con la electricidad, que cotiza en Bolsa, no le da información sobre cuál es el plan que va a hacer para extender la red en tal lado, o si un vecino quiere saber si el transformador que está en la esquina tiene PCB o alguna otra cuestión).

Por lo expuesto propongo suprimir el inciso m).

Otra cuestión a considerar, vinculada con la técnica legislativa, se encuentra prevista en el artículo 7° que como se mencionara contempla los sujetos obligados a brindar información pública. A tales fines propongo efectuar ajustes de redacción trasladando a “partidos políticos, sindicatos y universidades”, actualmente en el inciso j), que se refiere organizaciones empresariales y entes privados, al inciso l) que trata también de personas jurídicas públicas no estatales.

En el artículo 11 que prevé lo atinente al plazo en el cual debe ser evacuada la solicitud de información pública, que es de 15 días, prorrogable por un término similar, entiendo que ello vulnera el principio de progresividad de derechos humanos, puesto que el plazo de respuesta previsto en el decreto 1172/03 es de 10 días, por lo que tendría que ser conservado y aplicable a los tres poderes del Estado<sup>7</sup>. Propongo a tales efectos: “Toda solicitud de información pública requerida en los términos de la presente ley debe ser satisfecha en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles. El plazo podrá prorrogarse por otros diez (10) días hábiles de mediar circunstancias que hagan razonablemente difícil reunir la información solicitada”.

Asimismo, en este artículo propongo efectuar ajustes de precisión en cuanto al procedimiento para la reducción del plazo<sup>8</sup>.

El artículo 18 solo contempla las responsabilidades para los funcionarios públicos. Dado que el artículo 7° in fine, que contempla como sujetos obligados a personas públicas y privadas correspondería que en la ley se establezcan las sanciones correspondientes a las personas privadas dada la naturaleza penal administrativa de las sanciones que no podrían contemplarse en la reglamentación. Por lo que propongo incorporarlas en el texto del artículo en análisis<sup>9</sup>.

---

suficientes para tener por probado que la divulgación del contenido del acuerdo pudiese comprometer secretos industriales, técnicos y científicos.

<sup>7</sup> Decreto 1172/03, anexo VII, artículo 12, “Respuesta: el sujeto requerido está obligado a permitir el acceso a la información en el momento que le sea solicitado o proveerla en un plazo no mayor de DIEZ (10) días. El plazo puede ser prorrogado en forma excepcional por otros DIEZ (10) días, de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada”.

<sup>8</sup> El peticionante podrá requerir ante el órgano encargado de entregar la información, por razones fundadas, la reducción del plazo para responder y satisfacer su requerimiento, el que deberá ser resuelto en 48 horas desde la presentación.

<sup>9</sup> “En el caso de los sujetos obligados que no sean funcionarios públicos, la comisión de alguna de las conductas previstas en el primer párrafo del presente será sancionada con multa, que va desde los quinientos pesos (\$500) hasta los cinco millones de pesos las que se aplicarán de forma gradual de acuerdo con la gravedad del hecho. La Agencia de Acceso a la Información Pública reglamentará el procedimiento, el cual debe garantizar el ejercicio pleno del derecho de defensa. La resolución que imponga la sanción será impugnada únicamente mediante un recurso directo de apelación por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal o por ante las Cámaras Federales con asiento en las provincias, según corresponda conforme al lugar de comisión de la falta, dentro del plazo establecido en el artículo 25, último párrafo, de la ley 19.549. El recurso tendrá efecto suspensivo. El recurso directo deberá presentarse fundado ante el tribunal competente, el que solicitará de inmediato a la Agencia de Acceso a la Información Pública correspondiente la remisión de las actuaciones administrativas correspondientes, las que deberán ser elevadas en el plazo de cinco (5) días hábiles judiciales. Los recursos obtenidos por la percepción de las multas impuestas de

El artículo 23 relativo a los requisitos e incompatibilidades para ser designado director de la Agencia de Acceso a la Información Pública prevé que quien se haya desempeñado en cargos electivos o partidarios en los últimos 5 años previos a la designación no pueda ser designado director. Tal previsión constituye una limitación arbitraria e irrazonable pues no tiene fundamento en el ordenamiento jurídico. Además, considero que quienes se encuentren en esa situación tienen justamente mayor idoneidad en el ejercicio de la función pública. Propongo pues la supresión del quinto párrafo que contiene tal impedimento.

Por otro lado, una cuestión a resaltar es que el proyecto se enrola en la llamada transparencia activa, por la cual los sujetos obligados por la ley deben facilitar la búsqueda y el acceso a la información pública, a través de su página oficial de la red informática, de una manera clara, estructurada y entendible.

Tal obligación del Estado de implementar políticas de transparencia activa, es otro de los avances pues incluye: nóminas de autoridades, escalas salariales, presupuesto asignado y ejecutado, contrataciones públicas y gran cantidad de información que ya no será necesario solicitar a través de un pedido, sino que todas las dependencias del Estado quedan obligadas a proveerla de manera activa, es decir, de oficio.

Esto permitirá generar una cultura de acceso a la información pública no solo en la administración pública, sino en quienes requieren la información, porque muchas veces quienes solicitan información no conocían que ya estaba disponible en la página web del organismo requerido.

El artículo 34 establece excepciones a la transparencia activa. A los fines de guardar coherencia con lo propuesto en el artículo 8º, inciso i), propongo adecuarlo según la siguiente redacción: “A los fines del cumplimiento de lo previsto en el artículo 32 de la presente ley, serán de aplicación, en su caso, las excepciones al derecho de acceso a la información pública previstas en el artículo 8º de esta norma y, especialmente, la referida a la información que contenga datos personales de carácter sensible –en los términos del artículo 2º de la Ley de Protección de los Datos Personales, 25.326, y sus modificatorias–, o el régimen que eventualmente la sustituya”.

Por último, debe tenerse presente que el artículo 39 tal cual está redactado establece: “Cláusula transitoria 2. Hasta tanto los sujetos pasivos enumerados en el artículo 7º de la presente creen los organismos previstos en el artículo 28, la Agencia de Acceso a la Información Pública creada por el artículo 19 cumplirá esas funciones respecto de los que carezcan de ese organismo”.

Esto implica que hasta tanto el Poder Judicial no cree su propio organismo de información pública la Agencia de Acceso a la Información Pública de la presente ley será su autoridad de aplicación, situación que seguramente conllevará al Poder Judicial a una declaración similar a la que hiciera oportunamente, cuando se creó en la ley 25.188, de Ética Pública, la Comisión Nacional de Ética Pública, al considerar que sería inconstitucional que hubiera un organismo que controlara a los tres poderes, o en este caso al Judicial, si no estaba contemplado por la Constitución.

Propongo el siguiente texto: “Artículo 38 – Cláusula Transitoria. Las disposiciones de la presente ley, entrarán en vigencia al año de su publicación el Boletín Oficial. Los sujetos obligados contarán con el plazo máximo de un (1) año desde la publicación de la presente ley en el Boletín Oficial, para adecuarse a las obligaciones contenidas en ella. Hasta tanto entren en funcionamiento las Agencias de Acceso a la Información Pública creadas por esta ley, se mantendrán los plazos y las vías de reclamo vigentes conforme los decretos 1172/2003 y 117/16”.

#### 4. Cámara revisora

Por último, creo necesario detenerme en la importancia y rol que tiene la cámara revisora en el tratamiento de los proyectos de ley.

El ejercicio de la función legislativa, como etapa constitutiva de la ley, está a cargo de este Honorable Congreso de la Nación, y transita separadamente en cada cámara; la cámara donde empieza el tratamiento del proyecto se llama cámara de origen, y la otra se llama cámara revisora<sup>10</sup>.

Cada cámara aprueba el proyecto por sí, siguiendo el procedimiento establecido en los artículos 78 a 84 de la Constitución Nacional. En efecto, el artículo 78 de la Constitución establece que: “Aprobado un proyecto de ley por la Cámara de su origen, pasa para su discusión a la otra Cámara [...]”. Lograda la aprobación en ambas cámaras, el proyecto obtiene sanción con fuerza de ley, en los términos del artículo 84.

Como puede observarse, es la propia Constitución Nacional la que regula el derecho procesal parlamentario respecto de la formación y sanción de las leyes, lo que pone en evidencia la importancia central que el Constituyente quiso otorgar a este proceso.

---

acuerdo con lo establecido en este artículo serán destinados al programa “Asignación Universal por Hijo” o aquel que lo reemplace en un futuro”.

<sup>10</sup> Bidart Campos, Germán J., *Manual de la Constitución Reformada*, Tomo III, Ed. Ediar, Buenos Aires, 1997, pág. 144.

Este Honorable Congreso de la Nación es un órgano complejo, compuesto de dos Cámaras con funcionamiento independiente entre sí: “Cada una de las Cámaras tiene naturaleza de órgano”<sup>11</sup>.

Ello implica, que la sanción de un proyecto de ley es un acto complejo, porque requiere el concurso de dos órganos, que son cada una de las cámaras. Se trata de lo que Bidart Campos denomina “acto complejo interno o intraórgano”<sup>12</sup>.

Como puede observarse, el funcionamiento por separado e independiente está expresamente reglado por la Constitución Nacional, la cual asigna a cada Cámara un rol esencial e ineludible, de modo de asegurar el respectivo debate y su trabajo independiente.

La ingeniería del cuerpo legislativo para edificar una ley transita separadamente por cada una de las Cámaras del Congreso, por decisión expresa del Constituyente, para asegurar la seriedad del tratamiento del tema, el cual debe ser estudiado en forma propia por cada Cámara, garantizando la representación integral de la sociedad y el equilibrio federal necesario.

Dicho de otro modo, es la Constitución Nacional la que obliga a la Cámara revisora a analizar por separado el proyecto de ley que recibe, no siéndole posible acogerse directamente a lo dispuesto por la Cámara de origen, sin dar su propio debate y estudio del tema.

Para comprender la importancia del rol de cada Cámara y la interacción prevista entre la actividad de la Cámara de origen y la Cámara revisora, cabe analizar lo dispuesto en el artículo 81 de la Constitución<sup>13</sup>.

En dicho artículo, se determina el modo como se expresa la voluntad de cada Cámara y las facultades que ellas poseen ante las eventuales discrepancias que pueden originarse entre la iniciadora y la revisora, dado que la sanción de todo proyecto de ley requiere el concurso de ambas Cámaras<sup>14</sup>.

En primer lugar, si una de las Cámaras desecha totalmente un proyecto de ley, este no podrá repetirse en las sesiones de ese año.

En relación a los supuestos de desacuerdos parciales entre ambas Cámaras se prevé lo siguiente: “Si la Cámara revisora realiza modificaciones el proyecto vuelve a la Cámara de origen, y ésta podrá por mayoría absoluta de los presentes aprobar el proyecto con las adiciones o correcciones introducidas para que el proyecto pueda pasar al Ejecutivo para su promulgación, o bien insistir en la redacción originaria; a menos que las adiciones o correcciones las haya realizado la cámara revisora por dos terceras partes de los presentes. En este último caso, el proyecto pasará al Poder Ejecutivo con las adiciones o correcciones de la Cámara revisora, salvo que la Cámara de origen insista en su redacción originaria con el voto de las dos terceras partes de los presentes para sancionar en forma definitiva dicho texto legislativo”.

De modo que la cuestión puede sintetizarse de la siguiente manera, dado que el convencional constituyente en la reforma de 1994 previó un trámite más acelerado que el que antes estaba en vigor al reducirlo a tres tratamientos (en el texto de la Constitución de 1853/1860 el trámite legislativo podía tener hasta 5 tratamientos con sus respectivas medias sanciones hasta quedar sancionada definitivamente).

Ahora bien, el actual artículo 81 prevé:

– Las mayorías que se consideran para resolver los supuestos de desacuerdos parciales entre ambas cámaras se computan a partir de la votación en la cámara revisora.

– Devuelto el proyecto con modificaciones a la cámara de origen, ésta puede insistir con la aprobación de su proyecto original o aprobar el proyecto con modificaciones y adiciones de la cámara revisora. A este fin se tornan importantes las mayorías:

a) Si en la cámara revisora el texto con modificaciones se aprobó con mayoría absoluta y la cámara de origen en la segunda intervención aprueba su texto original con mayoría absoluta (más de la mitad), prevalece el texto original de la cámara de origen.

b) Si la cámara de origen insiste en su texto original con mayoría absoluta y la revisora lo aprobó el texto con modificaciones con dos tercios, prevalece esta última.

c) en este último caso si la cámara de origen insiste en su texto original con dos tercios prevalece el texto de la cámara de origen.

<sup>11</sup> Bidart Campos, Germán J., *Manual de la Constitución Reformada*, tomo III, Ed. Ediar, Buenos Aires, 1997, pág. 145.

<sup>12</sup> Bidart Campos, Germán J., *Manual de la Constitución Reformada*, tomo III, Ed. Ediar, Buenos Aires, 1997, pág. 145.

<sup>13</sup> Artículo 81.- Ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las Cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año. Ninguna de las Cámaras puede desear totalmente un proyecto que hubiera tenido origen en ella y luego hubiese sido adicionado o enmendado por la Cámara revisora. Si el proyecto fuere objeto de adiciones o correcciones por la Cámara revisora, deberá indicarse el resultado de la votación a fin de establecer si tales adiciones o correcciones fueron realizadas por mayoría absoluta de los presentes o por las dos terceras partes de los presentes. La Cámara de origen podrá por mayoría absoluta de los presentes aprobar el proyecto con las adiciones o correcciones introducidas o insistir en la redacción originaria, a menos que las adiciones o correcciones las haya realizado la revisora por dos terceras partes de los presentes. En este último caso, el proyecto pasará al Poder Ejecutivo con las adiciones o correcciones de la Cámara revisora, salvo que la Cámara de origen insista en su redacción originaria con el voto de las dos terceras partes de los presentes. La Cámara de origen no podrá introducir nuevas adiciones o correcciones a las realizadas por la Cámara revisora.

<sup>14</sup> Sabsay, Daniel y Onandía, José M., *La Constitución de los argentinos*, Errepar, Buenos Aires, 2009, pág. 282.



– En suma, se advierten dos cosas:

a) Tiene importancia el quorum de votos aprobatorios (mayoría absoluta, o dos tercios).

b) Tiene importancia preponderante la cámara de origen.

– Asimismo, hay dos prohibiciones expresas:

a) La cámara de origen no puede adicionar o corregir nuevamente las modificaciones introducidas por la revisora.

b) Ninguna cámara puede rechazar totalmente un proyecto originario de ella que ha recibido adiciones o enmiendas en la revisora.

De la interacción entre ambas Cámaras, fruto del trabajo realizado en cada una de ellas, surgirá la aprobación del proyecto de ley, luego de su estudio exhaustivo.

Expresamente el constituyente ha querido que se trate de una deliberación y estudio realizado por separado tanto en la Cámara de origen como en la revisora para asegurar el doble control propio del sistema bicameral.

Como hemos visto, es de suma importancia la deliberación (en sus dos instancias de discusión y votación) de cada proyecto como función de cada una de las Cámaras y, principalmente, de la Cámara revisora en el análisis de cada proyecto de ley. Recordemos que la discusión es el legítimo contraste público de pareceres en búsqueda de la verdad y del bien común. Esto es así porque cada Cámara está integrada por representantes de distintos grupos de interés, los cuales deben poder expresar su propia opinión del tema, enriqueciendo, a través de la confrontación dialéctica, el contenido del proyecto en análisis.

Por todo lo dicho, un proyecto de ley que no es sometido al análisis, deliberación y discusión de la Cámara revisora, no cumple con el procedimiento reglado por la Constitución, siendo dudosa su legitimidad.

En este sentido, el análisis del proyecto de ley por parte de la Cámara revisora debe analizar, entre otras cuestiones sustanciales del proyecto, la valoración jurídica –principalmente referida a que la norma sea coherente con el resto del ordenamiento jurídico–, la viabilidad y oportunidad política y su eventual aplicación práctica, sin perjuicio del análisis de la técnica legislativa.

De ahí la importancia del debate y sus instancias previas, como es el paso por las comisiones respectivas, donde se puede convocar a expertos en el tema, distintos actores sociales involucrados en la temática, representantes los de los diversos espacios políticos, todo ello a fin de escuchar y merituar sus aportes en relación al tema en cuestión.

Tal como lo señala el constitucionalista Gregorio Badeni: “El funcionamiento complementario, armónico y coordinado de esas cámaras, pese a que se concrete en forma separada e independiente permite la manifestación válida del órgano que integran... El funcionamiento de dos Cámaras, que se controlan y complementan recíprocamente en el ejercicio de las atribuciones comunes que les confiere la Constitución permite la inserción del federalismo mediante una solución relativamente sencilla...”.

En conclusión, lo que me interesa remarcar es la función primordial que tenemos en nuestras manos como legisladores de la Nación. Se nos ha encomendado la función legislativa que consiste sustancialmente en dar cumplimiento al procedimiento de formación y sanción de las leyes. En este sentido, y dada la envergadura de esta misión, llamo la atención sobre la importancia que la Constitución Nacional ha otorgado a la función de la Cámara revisora tal como lo vengo señalando pues su rol es esencial para la legitimidad, validez y vigencia de la ley en cuestión.

Un proyecto que no ha sido deliberado y analizado seriamente por cada una de las Cámaras no cumple con lo indicado por la Constitución Nacional para poder ser una ley válida y justa.

## 5. Conclusiones

Por lo expuesto, dado que la medida tiende a garantizar el efectivo acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública además de tratarse el acceso a la información pública de un derecho humano fundamental como lo señalara a lo largo del presente es que acompaño la iniciativa con las salvedades efectuadas.

Creo que es relevante destacar y marcar la desigualdad que existe entre nuestro país y países limítrofes frente a la reglamentación en esta materia, motivo por el cual nos encontramos en una clara situación de desventaja. Tal como lo expresaron algunos senadores que representan a provincias que limitan con otros países, se han hecho habituales los *tours* de compras un poco a partir de estas desigualdades. Argentina es uno de los países que registra las más altas comisiones en materia de tarjetas de crédito y débito. A modo de ejemplo, por citar algunos casos latinoamericanos, en Perú se percibe de 1,5 % al 2 %; en Brasil y en Chile el 1,3 % y en Colombia del 1,8 % al 2 %. Esto nos pone en una clara situación de desventaja.

Por todo lo expresado anteriormente, reitero mi apoyo a esta iniciativa.

11

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR PEROTTI

**Derecho de acceso a la información pública. (O.D. N° 604/16.)**

Señora presidente:

Ante la necesidad de mejorar la calidad democrática del Estado nacional y la transparencia de sus instituciones, y a bien de considerar que el derecho a la libertad de expresión y opinión, establecido en la Declaración Universal de los Derechos humanos, son dos de los principales basamentos de nuestra democracia y del sistema republicano, manifiesto mi apoyo a esta iniciativa.

Con el fin de lograr una democracia participativa efectiva, dotando a nuestros ciudadanos de instrumentos adecuados para alcanzar la transparencia administrativa de la información manejada por el Estado nacional, en el ejercicio pleno de las facultades que la libertad de expresión e información le otorgan a los ciudadanos de nuestro país, nos encontramos hoy, ante el desafío de extender los límites que el actual decreto 1172/2003 promulgado por el Ejecutivo nacional fija en torno al acceso a la información que “los organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias y todo otro ente que funcione bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo nacional” brindan a la población.

Señora presidenta, quiero poner de manifiesto que, en mi provincia, Santa Fe, está vigente el decreto provincial 692/09, firmado por el entonces gobernador Hermes Binner, que regula el acceso a la información pública en el ámbito de la administración provincial centraliza y descentralizada. Pero lejos se está de lograr una plena aplicación certera de este decreto por parte del gobierno provincial, basta con buscar en el Boletín Oficial resoluciones o decretos provinciales para confirmar que no todos se encuentran publicados y al acceso de los santafesinos.

La Cámara de Diputados de Santa Fe, señora presidenta, aprobó el 19/05/16 un pedido para que el Poder ejecutivo provincial informe a los legisladores, a los ciudadanos y a todos aquellos que quieran acceder a dicha información, en relación a los criterios de publicación en el Boletín Oficial y en la página web del gobierno de la provincia, de los decretos y resoluciones ministeriales emanadas de dicho poder. Hasta la fecha, este pedido de informes no ha sido contestado.

Señora presidenta, el proyecto presentado por el senador Pais, que acompaño desde mi banca en esta Cámara, reza en su fundamento que “además de ser un derecho humano, el acceso a la información es un derecho democrático necesario para la gobernabilidad efectiva del Estado”. Tenemos como legisladores nacionales la posibilidad concreta de responder ante un pedido reiterado de nuestros ciudadanos. El derecho de nuestra sociedad a poder acceder a la información de carácter público administrada por el Estado.

Por estos motivos es que quiero expresar mi acompañamiento a este proyecto de ley, con las modificaciones que se plantean en esta Cámara.

12

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR DE ANGELI

**Derecho de acceso a la información pública. (O.D. N° 604/16.)**

Señora presidente:

El cambio se empieza a notar, son grandes pasos en el mejoramiento de la administración pública, de la institucionalidad. El pueblo tiene la posibilidad, ahora, a un derecho que debería haber tenido siempre, el pueblo tiene derecho a saber cómo se administra y como se invierten los recursos públicos, y de esta manera evitar que se malgasten, se roben o se vayan en corrupción.

Esos recursos tienen que ir a salud, educación, a reforzar la seguridad, a infraestructura, para garantizarle a nuestra nación una mejor convivencia y que los ciudadanos vuelvan a confiar en sus

representantes. Esta es una de las herramientas que potencialmente tendremos para trabajar en pos de la transparencia.